**LAS MUJERES Y REPARACIONES
EN EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EN EL CONTEXTO
DE CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO**

**MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y CORTES INTERNACIONALES**

ESTHER MARÍA GALLEGO ZAPATA

DIRECTOR DE TESIS

ALEJANDRO VALENCIA VILLA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

2015

Bogotá, 12 de octubre de 2015

Señores

Maestría de derechos humanos

Facultad de Derecho

Universidad Santo Tomás

Ciudad

Me permito informarles que Esther María Gallego Zapata, estudiante correspondiente a la segunda cohorte ha realizado una investigación bajo mi dirección titulada "Las mujeres y las reparaciones en el sistema interamericano y en el contexto del conflicto armado colombiano". Estimo que la tesis puede ser sometida a su evaluación por parte del jurado que ustedes estimen adecuado.

Agradeciendo la atención que le merezca la presente, cordialmente,

Alejandro Valencia Villa

Tabla de contenido

Convenciones 5

Resumen / Abstract 6

Introducción 7

Capítulo 1. Las violencias contra las mujeres, una práctica patriarcal generalizada en el mundo 10

Una mirada general de las violencias contra las mujeres en la cifras 12

Conceptos sobre violencias contra las mujeres en el derecho internacional y la jurisdicción universal de derechos humanos 16

La discriminación y subordinación como núcleo del tratamiento desigual y violento contra las mujeres 17

Capítulo 2. Estado de arte jurisprudencial en materia de reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20

Violencia sexual 24

Conflictos armados y derechos de las mujeres 33

Afectaciones al proyecto de vida 35

El principio de debida diligencia 36

Derechos de las mujeres con orientación sexual no normativa 38

Estigmatización en razón de la opción sexual y estereotipos de género 39

Orden de ejecutar sanciones a particulares y funcionarios estatales 42

La sentencia como una forma de reparación *per se* 43

Lo general y lo abstracto 45

Reparaciones simbólicas 47

Reparaciones en casos de crímenes cometidos por particulares 48

Los Estados tienen un deber de acción positiva respecto de grupos históricamente discriminados **50**

Capítulo 3. Las demandas de reparaciones en la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado 52

Contenido del informe de *La verdad de las mujeres* **53**

Acerca de la cobertura geográfica de los testimonios tomados **54**

Enfoque metodológico **54**

Desde la epistemología feminista, los derechos de las mujeres, la Investigación acción participativa, el enfoque psicosocial y desde los aportes de comisiones de la verdad. **55**

Las reparaciones para las mujeres frente a violencias en el contexto del conflicto armado **58**

El derecho a la reparación para las mujeres armado **60**

Lo irreparable por los hechos que las impactaron armado armado **60**

La desconfianza en la institucionalidad pública para ser reparada **61**

La falta de información y de conocimiento del sistema para el acceso a las medidas de reparación **62**

La indignidad con que son tratadas como víctimas **62**

La no tramitación de la búsqueda de los desaparecidos **63**

La vigencia del conflicto armado **63**

La reparación que las mujeres esperan **64**

Reparaciones individuales y hacia sus familias **65**

Reparaciones estructurales **66**

Las reparaciones individuales en la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto

Armado **66**

Medidas de compensación	68
La tierra su acceso y devolución, una aspiración de mujeres rurales	70
Medidas de rehabilitación	72
La salud como medida de rehabilitación	73
Reparaciones simbólicas	74
Las reparaciones frente a la violencia sexual	75
La verdad como una forma de reparación	77
La justicia	79
Reparaciones estructurales para las mujeres	81
Derecho a la vivienda, educación, salud y seguridad social	83
Derecho a una vida libre de violencias contra las mujer	85
Medidas de no repetición de las violencias y la guerra	87
Protección para las mujeres	90
El Estado es el responsable	90
Conclusiones	92
Bibliografía	95

Convenciones

Comisión de la verdad: La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado.

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Comisión: Comisión interamericana de Derechos Humanos.

UARIV: Unidad de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado.

URT: Unidad de Restitución de tierras.

RPM: Ruta Pacífica de las Mujeres.

CEDAW: Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Belém do Pará: Convención Belém do Pará.

Resumen

Este trabajo de tesis se refiere a las reparaciones en casos de violencia contra las mujeres, analizadas a la luz de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas al tema y, del trabajo realizado por La Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado”, donde en uno de sus capítulos se recogen las reparaciones demandadas por las mujeres a raíz de los graves hechos e impactos sufridos en el contexto del conflicto armado. El trabajo evidencia que los hechos de violencias son los mismos, lo que los diferencia son los contextos donde tienen lugar; además, establece los desafíos que frente a este tema tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las reparaciones para las mujeres.

Palabras clave: feminismo, discriminación, derechos humanos de las mujeres, reparación a mujeres, cultura patriarcal, conflicto armado, justicia, violencia contra las mujeres, memoria, verdad.

Abstract

This thesis is about reparation in cases of violence against women, analyzed in judgments of the Inter-American Court of Human Rights, and the work done by La Ruta Pacífica de las Mujeres (Pacifist women Route) in Colombia, named “The truth of women victims of armed conflict”. One chapter of this document is about the reparation demanded by women as a result of serious events and impacts suffered in the context of armed conflict.

This work shows that acts of violence are the same, so the difference is the context in which they occur. Also establishes the challenges about this issue, that the judgments of the Inter-American Court of Human Rights should face in relation to reparations for women.

Introducción

La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.

Rigoberta Menchú

Este trabajo pretende explorar en detalle la forma en que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aborda las violaciones a derechos humanos de las mujeres, y su respuesta a las necesidades de reparación. El presente documento se escribe pensando en un contexto latinoamericano, aunque con miras en el caso particular de Colombia, que actualmente pasa por un proceso de paz en donde se están definiendo los mecanismos de reparación relacionados para todas las violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado, incluyendo crímenes contra las mujeres.

Precisamente en este momento histórico, en el que se evidencia la reivindicación de los derechos de las mujeres, emergen las demandas y las voces de las mujeres se hacen necesarias requiriendo un eco en las normas y jurisprudencia para que estas respondan a las realidades de las mujeres colombianas. Este trabajo pretende dar luces sobre lo que podría ser un eventual mecanismo de reparación desde el análisis de instrumentos internacionales a la luz de las voces de las mujeres víctimas de distintas violaciones de derechos humanos en Colombia.

Mi participación como coordinadora general del proceso de una Comisión de la Verdad —“La Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado”— me animó a trabajar las reparaciones que a través de las sentencias de la Corte Interamericana se han establecido para las mujeres y a partir de la experiencia de la Comisión de la Verdad iluminar todo este ejercicio, buscando conciliar los conceptos académicos de reparación, las reparaciones que

han tenido lugar en la CIDH y las demandas de las mujeres expresadas en este trabajo en Colombia, para proponer mecanismos que resulten en una reparación integral.

Para abordar esta investigación se parte de una mirada general sobre los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres y un contexto general y mundial de su ocurrencia, así como los diversos tratados y convenciones internacionales con los que se cuenta para su protección, especialmente la protección frente a las violencias contra las mujeres y algunas reglas de reparación que se incluyen en dichos tratados. Seguidamente, analizo varias sentencias de la CIDH desde la perspectiva de las reparaciones otorgadas a las peticionarias para finalmente darle una mirada a las demandas en reparación que las mujeres proponen en la Comisión de la Verdad de mujeres con el fin de evidenciar las faltantes o carencias que el Sistema Interamericano tiene aún respecto a las reparaciones integrales para las mujeres que superan los análisis realizados hasta ahora en las diferentes sentencias condenatorias.

Este trabajo parte del entendimiento de la imposibilidad de reparar totalmente los daños que han vivido las mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos. La premisa fundamental que acompaña esta tesis es que son las víctimas quienes deben guiar al Estado para llegar a un punto de equilibrio en el cual se sientan resarcidas por el daño, o por lo menos con posibilidades de recuperar sus proyecto vital, y donde además sus propias experiencias y ganancias se trasladen a reparaciones que transformen la realidad de las mujeres en un mundo dominado por un sistema patriarcal que las excluye, subordina y discrimina.

La reparación de la que hablo en este documento está atravesada por el concepto de dignidad humana, considerando que el centro de toda producción académica, jurisprudencial o legislativa alrededor de los derechos humanos es, precisamente, devolver la dignidad a las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

Este trabajo es un homenaje a las mujeres que han dado su testimonio y han luchado por ser reparadas integralmente, y un aporte a la esperanza de lograr que Colombia consiga reparar el daño que han vivido las ciudadanas que habitan su territorio.

Capítulo 1

Las violencias contra las mujeres, una práctica patriarcal generalizada en el mundo

La violencia contra las mujeres, una práctica y violación de derechos humanos extendida en el mundo, sigue siendo una asignatura pendiente por parte de los Estados del mundo, aunque estos hayan suscrito tratados internacionales; en parte por la ardua tarea de las mujeres quienes fueron las primeras en poner en el debate público su erradicación en los años setenta. “Son las mujeres, a partir de su práctica y reflexión teórica, quienes cuestionan las bases ideologías (*sic*) de los derechos humanos y abren un proceso que permite repensar lo humano desde sus diferencia y otras dimensiones de la convivencia” (Fries, L. y Matus, V., 1999, p. 18).

Para lograr una comprensión a profundidad del grado de violencia perpetrada contra las mujeres y revisar los avances en reparaciones logrados a través de instancias internacionales —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos— en relación con estas violaciones de derechos humanos, es importante reconocer los aportes e investigaciones que las organizaciones de mujeres y las teóricas feministas han producido para este análisis. Precisamente, al buscar establecer las causas, consecuencias y explicación (aunque no justificación) a la aparente aceptación social y naturalización de todas las formas de violencia contra las mujeres, adquieren importancia los hallazgos que a este respecto ha hecho el movimiento de mujeres a lo largo de su existencia.

Hay que partir de la premisa de que no es posible construir sociedades democráticas si no se erradican las violencias contra las mujeres. Tampoco los derechos humanos cumplen su función en la democracia si persiste un problema tan generalizado, actual y grave que afecta a

más de la mitad de la población. Además, es un imperativo ético que tiene que ver con la justicia social y la paz para las mujeres:

Lo que hace a la violencia una cara de la opresión es menos el conjunto de actos particulares en sí, a pesar de que estos son a menudo absolutamente horribles, que el contexto social que los rodea y que los hace posibles y hasta aceptables. Lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia social, y no solo una acción individual moralmente mala, es su carácter sistemático, su existencia en tanto práctica social (Youn Iris, 2000).

Hay muchos elementos que se entrecruzan permitiendo la repetición de esta práctica de violencia contra las mujeres: la impunidad en todos los niveles y, en especial, la judicial;

Los Estados carecen de una visión política íntegra institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. La Comisión observa algunas importantes deficiencias que afectan negativamente la investigación (...) retrasos injustificados (...) vacíos e irregularidades en las diligencias *per se* que obstaculizan los procesos de juzgamiento y la sanción eventual de los casos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007).

La complicidad por acción u omisión de las instituciones y de la sociedad que permite estas conductas; la representación de narrativas discursivas en los ámbitos jurídico-normativo y cultural, que naturalizan y desdeñan la violencia contra las mujeres, fortaleciendo un relato que en la práctica culpabiliza a las mujeres y refuerza un estado de opresión y subordinación milenario en el sistema social patriarcal.

¿Cómo buscar caminos para la eliminación de la violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres, y en particular la sexual, hay que entenderla y analizarla

como expresiones de relaciones de poder, opresión y subordinación y como vivencias continuas que las afecta y que, en su forma más extrema, termina en el asesinato de mujeres. Pero no solo se trata de entender el continuo de las violencias sino que también es necesario aceptar que ellas se encuentran presentes en ámbito público (*sic*) y en el privado, e independientemente de donde ocurran son de interés público por cumplimiento de la convención de Belém do Pará (Corporación Casa de la Mujer, y Ruta Pacífica, 2008, p, 16).

La única manera de reparar las violencias contra las mujeres de manera eficaz es erradicarlas y garantizar su no repetición. Este logro requiere pasar por el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido no solo en el orden jurídico, sino en el orden simbólico, requiere medidas que transformen las instituciones, medidas interdisciplinarias que favorezcan estos cambios hacia factores culturales determinantes (la escuela, la familia y el Estado) para superarla y así reparar la deuda histórica de la humanidad con las mujeres.

Para erradicar las violencias contra las mujeres, también es necesario construir una ética que tenga como centro la autonomía personal, la libertad de conciencia, la capacidad de control y de autoestima, la tramitación de los conflictos mediante el diálogo y la concertación, y no a través del ejercicio de las violencias, una ética que nos permita tomar distancia de dogmas y militarismos; asimismo, es necesario transformar las relaciones de poder, subordinación y opresión, en sus diferentes expresiones clase, sexo, etnia, orientación sexual, entre otras (2008, p. 16).

Una mirada general de las violencias contra las mujeres en la cifras

La violencia contra las mujeres ha sido una constante en la historia de las mujeres en el mundo y cuando se da en situaciones de guerra o conflictos armados como el colombiano se agrava, dado el contexto general de violaciones masivas de derechos humanos que finalmente

minimizan la multiplicidad de violencias que sufren las mujeres en estos contextos.

Existen variadas tipologías de violencias contra las mujeres en el espacio privado y público: la violencia sexual en sus diversas manifestaciones: violación, embarazo forzado, prostitución forzada, esclavitud sexual, trata de personas; mutilación genital, esclavitud doméstica, esterilización forzada, feminicidios (asesinato de mujeres por razones de género)¹, violencia física y psicológica, entre otras formas, demuestran la multiplicidad de facetas y performatividad de esta problemática, que no cede y evidencia que las estrategias implementadas por los Estados para superarla han sido ineficaces.

A pesar de que la violencia contra las mujeres en la actualidad es objeto de análisis, denuncias, investigaciones y sanciones jurídicas, persisten vacíos de información sobre su ocurrencia, dado que los Estados lo ven como un problema periférico reflejado en la falta de políticas para conocer las dimensiones que tiene y para su afrontamiento como un problema de orden social, político, económico y cultural que incide de manera directa en que las mujeres sean tratadas como seres inferiores y subordinados.

Comenzar este trabajo desde la mirada de un contexto mundial sobre la problemática referida a las violencias contra las mujeres, nos da un punto de partida sobre la universalidad de esta práctica y estado de terror contra las mujeres, contextualizando la necesidad de reparar los daños que se generan.

Y no es para menos, porque las cifras hablan por sí solas, y aún se desconoce la realidad en su totalidad, pues se sabe que en cada país existe un alto nivel de subregistro de este tipo de violencias en el espacio privado y público, y cuando se trata de conflictos armados o

¹ En la medida en que se han reconocido los asesinatos a las mujeres por el hecho de ser mujeres se ha ido ganando la lucha de las organizaciones feministas por la tipificación de este tipo de homicidios que reconoce que la base de la culpa del victimario se fundamenta en la intención de cometer dicha conducta porque opera bajo el sistema de poder de género, donde los varones, por misoginia, poder y odio hacia las mujeres, llevan a cabo este tipo de crímenes.

sociedades altamente militarizadas esta realidad se exagera y se oculta. Contextos como el colombiano, en donde persiste el conflicto armado, hacen que las mujeres teman denunciar, ejemplo de ello lo vemos en el siguiente dato: a junio de 2015, solo se han denunciado 13 delitos sexuales ante la Unidad de Víctimas en Colombia (Registro Único de Víctimas, 2015). Esto habla por sí solo de la poca confianza que tienen las mujeres en la institucionalidad, y los insuficientes esfuerzos que esta ha desplegado para permitir que las mujeres víctimas accedan a la justicia.

Así lo reflejan Organismos internacionales encargados de velar por el desarrollo de derechos humanos en los países miembros, como Naciones Unidas (UN), ONU Mujer, Amnistía internacional (AI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cepal, así como observatorios por países. Las cifras sobre violencia contra las mujeres permiten dimensionar la gravedad y permanencia del problema a nivel mundial, veamos:

Según informe de la OMS, con datos de 2014, la violencia contra las mujeres tiene dimensiones pandémicas, un 35% de mujeres han sido golpeadas por sus parejas o sido víctimas de violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, así mismo el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas (OMS, 214).

Según ONU Mujer, en su informe actualizado en 2014, al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, abusada sexualmente o sido víctima de algún otro modo de violencia en el transcurso de su vida y el abusador habitualmente es alguien conocido de ella. Continúa el informe diciendo que 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas (menores de 18 años), más de 250 millones se casaron teniendo 15 años, lo que las coloca en estado de vulnerabilidad ante enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y las somete a embarazo precoz. La trata de personas convierte en el principal objetivo a mujeres y niñas representando el 55% de trabajo forzado un estimado de 20,9 millones de personas en todo el mundo y respecto a la explotación sexual contra su voluntad se estima que son

víctimas mujeres y niñas en un 98% de un total de 4,5 millones de personas; así mismo, 133 millones de niñas han tenido alguna mutilación genital en 29 países de África y Oriente Medio, regiones donde más se da esta abominable práctica (ONU Mujer, 2014 y Unicef, 2013).

En los conflictos armados las mujeres tienen distintos tipos de violencia y aunque mundialmente las cifras que más se observan son las relacionadas con violencia sexual, estas demuestran la gravedad de las violencias que tienen ocurrencia en estos contextos. Según cifras conservadoras, entre 20 000 y 50 000 mujeres fueron violadas en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995. Por su parte, las cifras de Rwanda rebasan las 500 000 mujeres y niñas víctimas de genocidio en 1994 (ONU mujer, 2012).

En América Latina también el registro de las cifras refleja la misma realidad. Según el seguimiento llevado a cabo por la Cepal, refleja estadísticas sobre algunos tipos de violencia en el espacio privado, es decir, en su casa o con alguien con quien tiene un vínculo afectivo. En la última década, según encuestas, aproximadamente 61 de cada 100 mujeres en México, Ecuador, Paraguay y Uruguay han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja u otra persona. Así mismo, se reflejan cifras sobre las mujeres indígenas con datos registrados en un 38% en Ecuador y Perú, y un 20% y 24% en Guatemala y Paraguay, respectivamente (Cepal, 2014).

Sin embargo, de los múltiples tipos de violencia que sufren las mujeres solo algunos pocos han llegado a la jurisdicción interamericana. Solo a partir del 2001 se dio la primera intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el caso de Maria da Penha Maia Fernandez vs. Brasil, donde se invocó la violación de la Convención Belém do Pará, responsabilizando al Estado por la impunidad frente a este hecho y se configuró un patrón sistemático de ineffectividad judicial (CIDH, 2001). De ahí en adelante, la CIDH ha procesado Estados por algunos hechos violatorios a las convenciones relacionados con

violencias contra las mujeres, entre ellos tenemos el caso de algunas tipologías de violencia, como son ‘feminicidio’ y ‘violencia sexual’. Sobre el feminicidio, ni la jurisdicción interamericana ni la jurisdicción universal de derechos humanos la han abordado con el nombre de feminicidio, dejando una deuda con los derechos fundamentales de las mujeres, tema que trataré con mayor profundidad. En el caso de la CIDH, esta prefiere hablar de violación al artículo 4 de la Convención Americana (derecho a la vida), pero nunca ha usado el término ‘feminicidio’.

De hecho, en la sentencia Campo Algodonero, la Comisión no presentó el informe bajo el precepto de que fuesen feminicidios. La representación de las víctimas lo hizo, pero la Corte desestimó el argumento y prefirió hablar de homicidios (Sentencia Campo algodón vs. México, 2009, p. 42).

Conceptos sobre violencias contra las mujeres en el derecho internacional y la jurisdicción universal de derechos humanos

La conceptualización de la violencia contra las mujeres ha llegado muchos años después de la Carta Universal de los Derechos Humanos, tras lo cual se ha ido desarrollando a través de diversos tratados y convenciones internacionales, lo que hace que haga parte del derecho internacional de los derechos humanos. El movimiento de mujeres y feminista, a través de sus acciones y elaboraciones, ha sido un protagonista principal en este gran avance.

El marco jurídico internacional hace especial referencia a la protección de las mujeres contra las violencias ejercidas en su contra, contiene avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, esto no ha garantizado que tales derechos sean reconocidos y protegidos en las legislaciones nacionales; aunque estos son parte de sus cartas constitucionales, y en muchos países existen leyes protectoras, no ha sido suficiente para superar estos delitos y violaciones a la vida e integridad de la mujer.

Los tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales han desarrollado una normatividad internacional como marco de protección de todos los derechos humanos (sin distinción de sexo, raza, género, orientación sexual, creencias religiosas y otras condiciones específicas de las personas). A pesar de este desarrollo normativo, se ha requerido un mayor avance y realización de los derechos específicos y diferenciales.

En relación con los derechos de las mujeres, la normativa internacional ha adoptado tres tratados que plasman la importancia que tiene el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Para ello, en primer lugar, se acordó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación (CEDAW), la Convención de Viena (1993), que reconoce explícitamente la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, y más recientemente la Convención Belém do Pará (2004) sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres; ambas se basan en el principio de no discriminación y con el tratamiento a las violencias contra las mujeres; así mismo, la Corte Penal Internacional tiene en su articulado los crímenes de lesa humanidad que constituye la violencia sexual en contextos de guerra y conflictos armados.

La discriminación y subordinación como núcleo del tratamiento desigual y violento contra las mujeres

Uno de los pilares para la aplicabilidad de los derechos humanos de las mujeres son los principios de no discriminación e igualdad. Estos principios se refieren a la diferencia entre los individuos a quienes se les otorga el mismo valor, sin importar su procedencia, opciones de vida, opciones sexuales, raza, etnia y género, entre muchas otras diferencias que comportan las personas.

La igualdad tiene que ver con las limitaciones para el pleno y efectivo goce de los derechos de las personas. La no discriminación y la igualdad se sustentan en la justicia como principio normativo, y como derecho se sustenta en el principio ético de la justicia: no es justa la convivencia en la desigualdad y tampoco la competencia en la desigualdad (Torres, I., 2001). Para las mujeres, un tratamiento igual pasa por la consideración de sus condiciones específicas, los obstáculos que ostentan la cultura y la vida social, política y privada. Esto redundaría en el respeto por su autonomía y libertad, y contribuye a la erradicación de las diferentes formas de violencia que se presentan en su contra.

En este sentido, hay avances importantes en los tratados internacionales cuando hacen la distinción sobre la aplicabilidad de los derechos humanos de las mujeres, basados en las diferencias sociales, culturales, políticas, sexuales y étnicas, así como en la identidad de género aplicando el principio de no discriminación y de igualdad desde una perspectiva de justicia. Las formas de violencia contra las mujeres son prácticas derivadas de una concepción de sociedad que asume la discriminación y subordinación de la mujer como algo natural, por ello es fundamental dar un tratamiento especial a estas expresiones violentas, que de no tratarse y erradicarse obstaculizarían el avance de la democracia y el desarrollo para las mujeres y la sociedad en su conjunto.

Por lo anterior, los instrumentos internacionales y nacionales han dado lugar a desarrollos progresivos en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en todo el mundo y han cuestionado las prácticas sociales y políticas que sustentan cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

De la prolífica normatividad internacional sobre los derechos humanos se han desprendido tratados y convenciones dedicadas a los derechos de las mujeres y al tratamiento jurídico y desde una perspectiva de derechos sobre la erradicación de las diferentes formas de violencia en su contra.

La Convención de Belém do Pará, la Convención para la erradicación de todas las formas de discriminación y la CEDAW son los principales instrumentos jurídicos de carácter internacional que se han suscrito por el Estado colombiano en materia de derechos de las mujeres. Ambas convenciones abogan por reparaciones para las mujeres de forma estructural (medidas interdisciplinarias para su erradicación) y por reparaciones individuales para las víctimas de estas prácticas que obstaculizan el desarrollo de la autonomía y la ciudadanía de las mujeres. Pese a la existencia del bloque de constitucionalidad, muchos jueces cuestionan y aún temen usar en sus providencias estos instrumentos como fuente de derecho que justifique sus decisiones. De ahí la importancia del art. 2.º de la Convención Americana, que ordena a los Estados a que adapten su derecho interno a las obligaciones internacionales que tienen.

Estos conceptos, analizados en el presente capítulo, resultan relevantes para entender el contexto en el que los jueces deben reparar las agresiones a derechos fundamentales de las mujeres, y el porqué ellas exigen con vehemencia mecanismos diferenciales de reparación, así como garantías de no repetición.

Una vez hecha esta conceptualización general, pasaré a analizar la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo relacionado con reparaciones a mujeres víctimas.

Posteriormente, en el capítulo 3, realizaré un análisis con base en el trabajo de la Comisión de la Verdad de las Mujeres, llevado a cabo por la Ruta Pacífica de las Mujeres, en relación con las reparaciones propuestas por las mujeres víctimas (en este importante aporte sobre la verdad en justicia transicional) y con los ajustes en reparaciones que las jurisdicciones nacionales e internacionales deberían recoger como forma de diferenciación en materia de reparaciones que requieren las mujeres víctimas de violencias, sea en contextos de paz o en el marco de un conflicto armado, como es el caso de Colombia.

Capítulo 2

Estado de arte jurisprudencial en materia de reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Para hablar del estado actual de la teoría y práctica de reparaciones, es importante empezar diciendo que el sentido y razón de la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido, precisamente, reparar los daños causados por la acción u omisión de los Estados, cuando estos no han sido capaces de evitarlo o en sus ordenamientos jurídicos no hay mecanismos idóneos para resarcir afectaciones a los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH o simplemente Corte) es quizá una de las instancias orientadoras en lo que respecta a jurisprudencia relacionada con reglas jurídicas para la reparación de violaciones de los derechos humanos.

Los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ser conceptos jurídicamente vinculantes para los países que han ratificado este instrumento, han tenido un efecto trascendental en la construcción de un precedente para el abordaje de reparaciones en casos de violaciones de los derechos humanos.

Dentro de ese esfuerzo, la Corte IDH ha establecido incluso reglas para la reparación con enfoque diferencial destinadas a varios grupos históricamente vulnerados, entre ellos las mujeres, con el fin de responder a sus necesidades específicas. Hablar de reparaciones en la Corte IDH implica hacerlo desde una mirada multicultural y con un lente que analiza los orígenes de los actos vulneratorios de derechos. En el Sistema Interamericano las reparaciones adquirieron un significado mas allá de una compensación meramente económica. De hecho, la Corte IDH abrió un campo en el derecho internacional para el concepto de reparaciones simbólicas como mecanismo para el restablecimiento de derechos para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y generar memoria histórica al

respecto. El caso 19 comerciantes vs. Colombia es un claro ejemplo de ello. El monumento que reposa en honor a las víctimas de desaparición forzada es una muestra de los avances de la jurisprudencia de la Corte en este sentido, dado que ordena por primera vez al Estado colombiano ejecutar medidas simbólicas para preservar la memoria histórica de un hecho vulneratorio de derechos humanos (Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, 2004, parte resolutive 5).

En cuanto a violaciones de los derechos humanos de las mujeres, la Corte IDH ha sentado un precedente en relación con las consideraciones especiales que se deben hacer en estos casos, teniendo en cuenta las condiciones de discriminación histórica que han vivido las mujeres. La Corte IDH ha resuelto el dilema de la responsabilidad estatal en diversas clases de violaciones de los derechos humanos de las mujeres: mujeres privadas de la libertad, mujeres víctimas de violencia sexual, entre otros. Si bien en la mayoría de los casos asumidos por la Corte hay mujeres involucradas, examinaré aquellos en donde el análisis se da específicamente en relación con los derechos fundamentales de las mujeres.

Las reglas de reparación a las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las mujeres son las mismas que para cualquier otro caso, desde el punto de vista estrictamente legal y del sistema universal en lo referido a las reparaciones. La diferencia radica en las medidas afirmativas que se puedan otorgar, en reconocimiento de afectaciones especiales que se hayan vivido por el hecho de ser mujer, y en que algunas sentencias toman en cuenta las discriminaciones históricas a las que han sido sometidas las mujeres.

Además de la reparación integral, la acción sin daño, la aplicación de enfoques diferenciales y la proporcionalidad, la teoría del ‘daño especial’ que desarrolla la Corte IDH parte del reconocimiento de afectaciones que solo pueden vivir las mujeres y nace del análisis del conjunto de causas de la violación a prerrogativas fundamentales. Como ejemplo, podemos citar el caso Penal Castro Castro vs. Perú (2008), en donde las reparaciones

asignadas a las reclusas embarazadas que fueron objeto de malos tratos de parte de la autoridad fueron mayores en términos pecuniarios a aquellas que vivieron otro tipo de afectaciones.

Un elemento importante asumido por la Corte es que se tiene en cuenta el contexto de cada caso, analizando la forma en que estos usualmente son desfavorables para las mujeres y que suelen recrudecerse en condiciones que propician violaciones de los derechos humanos (como es el caso de los conflictos armados), o privación de la libertad en condiciones inhumanas, o situaciones de alta vulnerabilidad de las mujeres como en el caso Campo Algodonero (2011). En este caso en particular, la Corte hizo un análisis del contexto de Ciudad Juárez y la forma en que las condiciones sociales y políticas de la zona tuvieron un efecto específico en las mujeres, generando una vulneración sistemática a sus derechos fundamentales.

El caso Rosendo Cantú vs. México (2011) es quizá uno de los fallos más claros en relación con las reglas de reparación de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. La Corte sentó en este caso un precedente en cuanto al manejo de estos casos como un asunto de “orden público Internacional” y de “interés colectivo”.

Es importante decir que no son muchos los casos en donde la Corte IDH analiza de forma específica vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres. Los análisis que hemos encontrado en el estudio de los fallos de este tribunal no son mayoría en relación con el volumen de sentencias existentes; países con un número importante de fallos, como Colombia, tienen pocos casos que den cuenta específicamente de violaciones de los derechos humanos de las mujeres. De hecho, en el caso colombiano, no tenemos una sentencia emblemática sobre casos relacionados con las mujeres, a pesar de haber resuelto casos como el de Ituango vs. Colombia (2006), donde de la descripción de los hechos y del contexto se

derivaban hechos de violencia sexual que ni siquiera fueron analizados por la Corte², así no hiciera parte de las peticiones o de la demanda. Si bien es cierto que en algunas de las sentencias aparece mencionado tangencialmente el tema, la Corte IDH aún tiene como asignatura pendiente el análisis concreto de las múltiples afectaciones que han vivido las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano y en su vida privada y pública.

Cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos de las mujeres de forma específica, nos referimos a afectaciones que se den sobre las mujeres, por el hecho de serlo, o que estén enmarcadas en prejuicios, subordinación, negación de derechos y discriminación basada en el género. Usamos el mismo marco teórico de la convención Belém do Pará, entendiendo la violencia contra las mujeres en el sentido analizado por el Comité de expertos que hacen seguimiento a esta convención en la Convención de Pachuca (2014) y desde el Consenso de Montevideo en donde los Estados se comprometieron a erradicar la violencia contra las mujeres, entendida como

La violencia física, sexual y psicológica:

- a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
- b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
- c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

² El informe de 9 de diciembre de 2001 de la Comisión Interamericana habla de la falencia en la investigación de delitos sexuales. Consulta en línea: <http://cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf>

En lo restante de este capítulo, haré referencia a las reglas jurisprudenciales del Sistema Interamericano en relación con los derechos humanos de las mujeres, dividiéndolo por temas específicos abordados por la Corte IDH.

Violencia sexual

La jurisprudencia de la Corte en este tipo de violaciones de los derechos humanos puede describirse con claridad mediante el estudio de dos casos: Rosendo Cantú vs. México y Lori Berenson vs. Perú. En ambos casos hablamos de violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con condenas a los Estados por la impunidad en la que permanecen los casos hasta la fecha.

Llama la atención que no haya en la jurisprudencia del Sistema Interamericano un análisis de violencia sexual contra mujeres en el marco de los conflictos armados y dictaduras que han existido en América Central y del Sur, pese a que todos estos estados son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Aunque hay que anotar que es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien le corresponde presentar dichos casos, esta ha presentado pocos informes en relación con casos de violencia sexual ante la Corte Interamericana en los últimos diez años, lo que lleva a que nos preguntemos si tal situación se debe a un bajo nivel de peticiones, o a carencias en el análisis y estructuración jurídica de los casos.

En el caso Campo Algodonero vs. México (2011), si bien el eje central fue la desaparición y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se hizo una mención tangencial a los rastros de violencia sexual que se encontraron en algunos de los cuerpos recuperados, la Corte no profundizó en el tema, limitándose a señalar que el mayor índice de impunidad estaba concentrado en los casos en donde hubo algún tipo de violencia sexual involucrada. De hecho, la Corte se sustrajo de determinar como tortura las violaciones sufridas por algunas de

las víctimas de Ciudad Juárez, lo que generó la necesidad de un voto concurrente de parte de la jueza Cecilia Medina Quiroga, quien manifestó que

Si se leen los párrafos 218, 219, 220 y 230 de este fallo, puede advertirse que las tres víctimas sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. La descripción del estado de los cadáveres, aunque fue hecha de manera ineficiente en los primeros momentos, muestra la magnitud del tratamiento que se les infligió, de modo que los hechos permitían ser considerados como actos de tortura.

Si bien el Sistema Universal de Derechos Humanos no ha vacilado en calificar la violencia sexual como una forma de tortura, el Sistema Interamericano ha resultado un poco más estricto en cuanto a hacer esta calificación, estableciendo cuatro requisitos: a) daño intencional; b) daño que cause severos sufrimientos físicos o mentales, c) daño cometido con determinado fin o propósito y d) aquiescencia o participación estatal.

Como lo señaló la Jueza Medina Quiroga, solo el Sistema Interamericano y algunos ordenamientos jurídicos internos contemplan el requisito de la aquiescencia o participación estatal para calificar un hecho como tortura.

Esta definición, que podría calificarse de rígida, hace que muchos de los casos de violencia sexual que analiza el Sistema Interamericano no sean calificados como tortura, pese al acuerdo logrado en sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Probar la participación o una eventual aquiescencia del Estado no siempre resulta sencillo en casos de violencia sexual, por lo que la falta de pruebas en este sentido puede llevar a que el SIDH no califique un caso como tortura, aun cuando cumpla con todas las características para serlo. En casos de violencia sexual en donde la responsabilidad del Estado suele darse por vía indirecta, resulta una tarea compleja probar que hay algún tipo de participación o permisividad del Estado. Este requisito, entonces, pide a las mujeres que prueben que el

Estado de alguna forma permitió que el hecho victimizante ocurriera. La no aplicación de la inversión de la carga de la prueba en casos de violencia sexual favorece la impunidad y dificulta el acceso a la justicia en estos casos en donde la prueba es compleja al ser delitos que usualmente ocurren en contactos privados sin ningún tipo de testigos, y generalmente mediando subordinación entre victimario y víctima.

Por otro lado, la Corte ha sido muy estricta en condenar a los Estados por la dilación de la atención médica a víctimas de violencia sexual. De hecho, este fue uno de los ejes conductores de la declaración de responsabilidad estatal del Gobierno de México por lo ocurrido a la menor Valentina Rosendo Cantú (2011). La Corte es clara al decir que el derecho a la salud es una prerrogativa fundamental de toda persona, que debe ser accesible con mayor rapidez y eficacia en casos de violencia sexual para prevenir efectos irreversibles en la salud de la víctima. De ahí se deriva que las medidas de reparación que ordena la Corte en la mayoría de los casos contemplan la garantía de atención integral en salud.

La Corte IDH ha establecido que los Estados deben garantizar que los exámenes médicos legales a víctimas de violencia sexual se hagan con el consentimiento de la víctima y permitiéndole elegir el sexo de la persona que los practicará. Esto se dio en el caso *Penal Castro Castro vs. Perú*, en donde una de las formas de violencia sexual por la que se condenó al Estado fue, precisamente, realizar exámenes ginecológicos forzados a las víctimas. En la condena proferida sobre este tipo de victimizaciones se evidencia como aspecto en común el reproche que hace la Corte a los Estados que no garantizan ese derecho de las víctimas.

El acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual es otro de los temas analizados en detalle por la Corte. La Corte IDH, en el caso *Rosendo Cantú y otra vs. México* (párr. 28), hace referencia a la obligación estatal reforzada que surge en cuanto a la investigación de casos de violencia sexual. La condena al Estado es enfática en decretar la responsabilidad internacional del Estado por no contar con un sistema judicial fuerte que

investigue y sancione a los responsables de las violaciones o afectaciones a la integridad sexual de las mujeres, privaciones de la libertad y derechos de las mujeres. Por ello, una de las medidas de reparación más comunes que se ven en casos de violencia sexual tramitados ante el Sistema Interamericano consiste en la garantía del acceso a la justicia y a un proceso penal.

Un aspecto a destacar de la jurisprudencia de la Corte en materia de reparaciones por casos de violencia sexual es que ha usado conceptos de organizaciones sociales y movimientos de mujeres para ilustrar el caso y hacer la valoración de los daños padecidos por las víctimas. En el caso de la sentencia Rosendo Cantú (2010), concurrieron como peritos expertos de diversas organizaciones indígenas como Taplatec³. Esto es de vital importancia para alimentar el estudio del caso que hace la Corte con los análisis de contexto detallados que puedan aportar las organizaciones sociales. Es particularmente importante en los casos de violencia sexual, en donde los altos niveles de impunidad hacen que la información oficial existente sea limitada. De igual forma, en el caso de Campo Algodonero (2011) la Corte solicitó varios *amicus curiae* de expertas en los temas de discriminación y género que le permitieron el análisis de las discriminaciones históricas de género y la directa relación con los asesinatos y las desapariciones forzadas, la falta de debida diligencia del Estado mexicano para la búsqueda de las jóvenes desaparecidas, dado que las reparaciones tienen una relación directa con las afectaciones y su contexto (párr. 245) . Los peritazgos y *amicus curiae* que la Corte IDH incluye en sus fallos son claves en la determinación de los mecanismos necesarios para resarcir el daño padecido por la víctimas.

La Corte ha sido también enfática en afirmar que una de las medidas de reparación para las víctimas de violencia sexual en aquellos casos en donde el victimario es un agente estatal,

³ Taplatec es una organización social mexicana que se ha especializado en el relato detallado y obtención de la verdad en casos de violencias basadas en género.

es reforzar los sistemas de responsabilidad disciplinaria existente en el ordenamiento jurídico interno, así como los mecanismos de control que operan en los países ratificantes del Pacto de San José.

La Corte IDH hace en su jurisprudencia sobre violencia sexual un análisis de los aspectos que pueden hacer más gravosa la situación de las víctimas. En el caso Rosendo Cantú, la Corte estableció que en contextos en donde las mujeres indígenas son restringidas y vulneradas en sus derechos culturales, los niveles de impunidad son mayores (Corte Interamericana Caso C 216 Rosendo Cantú vs. México (párr. 70). En consonancia con lo dicho anteriormente sobre la importancia que le da la Corte IDH al acceso a la salud para víctimas de violencia sexual, la Corte dedicó buena parte de esta sentencia al análisis de la forma en que las restricciones a derechos sociales, económicos y culturales que viven las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas afectan sus posibilidades de atención cuando padecen violencia sexual (así se ve en la parte resolutive de las sentencia Campo Algodonero y Rosendo Cantú). Por ende, otra de las formas de reparación que encontramos con frecuencia en la jurisprudencia interamericana es el otorgamiento de medidas especiales para el acceso a salud, educación y vivienda. En este caso, la Corte toma como referencia las vulnerabilidades a las que están sometidas las mujeres indígenas en razón a prácticas culturales, que las exponen a un mayor sometimiento de violencias sexuales, especialmente tratándose de niñas indígenas (Caso Rosendo Cantú, párr. 55).

Igualmente, la Corte hizo un análisis detallado de la forma en que no contar de forma oportuna con un traductor hace más gravosa la situación de las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual que no hablan español como primera lengua. Uno de los reproches más fuertes que la Corte le hizo al Estado mexicano en el caso Rosendo Cantú vs. México 2010 fue precisamente que la víctima no contaba con traducción a la hora de interponer la denuncia penal respecto de la violencia sexual que padeció (párr. 168). Esto tuvo una incidencia en las

reparaciones otorgadas, dado que se encontró una afectación al art. 8.º de la Convención Americana en materia de garantías judiciales, y por tanto se ordenó una reparación específica por esta vulneración (Rosendo Cantú vs. México, Resuelve de la Sentencia).

En la sentencia Rosendo Cantú y otra vs. México, la Corte analizó en detalle la forma en que la militarización del estado de Guerrero afectó el proyecto de vida de las mujeres indígenas residentes en la zona, en particular ante el incremento de la violencia sexual contra ellas (párr. 78). De nuevo, la Corte analiza los elementos del contexto que pueden hacer más gravosa la situación de las mujeres, para determinar reparaciones diferenciales.

En materia probatoria la Corte ha generado un criterio favorable para los derechos de las víctimas, en donde se admiten pruebas como notas de prensa y testimonios de personas que no presenciaron los hechos, pero conocen el contexto en que ocurrió el caso. Esto es un avance importante, dado que la rigidez de los criterios probatorios suele ser una dificultad de las víctimas de violencia sexual (párr. 35).

La misma Corte de forma expresa ha dicho que su régimen probatorio es menos rígido que el procedimiento interno, por lo que se admiten, como en el caso de violencia sexual, unos parámetros de prueba menos estrictos. Lo que se convierte en insumo hacia las políticas en materia probatoria para los Estados, siendo este un obstáculo recurrente para la justicia en materia de violencias contra las mujeres, especialmente la violencia sexual.

Como lo ha señalado esta Corte desde su primer caso contencioso, para un tribunal internacional los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos (118). Su procedimiento, como tribunal internacional que es, presenta particularidades y carácter propios por lo cual no le son aplicables automáticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos. La protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal (119). A los efectos y propósitos de la Sentencia de esta Corte, los elementos de convicción que surgen del acervo probatorio resultan suficientes para arribar a

la conclusión antes señalada. Los estándares o requisitos probatorios no son los de un tribunal penal, dado que no le corresponde a esta Corte determinar responsabilidades individuales penales ni valorar, bajo tal criterio, las mismas pruebas (párrs. 118-119).

La responsabilidad estatal suele tener unos requisitos estrictos, en donde la ausencia de pruebas directas es un obstáculo para el éxito de los procesos contra el Estado en todos los ordenamientos jurídicos existentes. Sin embargo, el precedente de la Corte IDH en cuanto a la admisibilidad de “prueba de relación” mediante testimonios de terceras personas, notas periodísticas, entre otros, sienta un precedente útil para los Estados partes de la Convención, y de hecho vinculante conforme al art. 2.º de la misma. La prueba en materia de reparaciones tiene una relación de causa-efecto. De lo que se logre probar como perjuicio imputable al Estado, se obtendrán las reparaciones. Al permitir que la víctima de violencia sexual pruebe su daño por medios como publicaciones periodísticas, testimonios de terceros, entre otros, la Corte IDH hace más asequible las reparaciones para las víctimas, dado que en muchos sistemas jurídicos, se les exige probar mediante elementos materiales la ocurrencia de la violencia sexual y la relación directa de un agente del Estado con ella.

De hecho, al ser la violencia sexual una de las conductas más difíciles de probar, la Corte abre un espacio para la garantía de los derechos de mujeres víctimas que en sus ordenamientos jurídicos tienen la exigencia de presentar evidencia material. En el caso *X e hijos vs. Colombia* (2009) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa entidad otorgó medidas provisionales a la víctima usando la doctrina de la Corte en materia probatoria, en donde los reportes periodísticos y testimonios de terceros son elementos suficientes para determinar la responsabilidad del Estado. Esto tiene incidencia en las reparaciones, dado que estas responden al daño y los hechos que se logren probar en el proceso. En la medida en que los requisitos probatorios sean menos rígidos, más fácil resulta para la víctima probar sus afectaciones y acceder a la reparación.

Uno de los avances más importantes incorporados por las sentencias de la Corte IDH en lo relacionado con el aspecto probatorio es la valoración del testimonio de la víctima. La Corte ha sido clara al manifestar que lo dicho por la víctima adquiere mayor relevancia en casos de delitos sexuales, dado que este tipo de hechos suelen ocurrir en contextos privados donde no hay testigos⁴. De la misma forma, la Corte manifiesta que si bien pueden ocurrir algunas inconsistencias en el relato, esto no es óbice para que no sea valorado integralmente, dadas las circunstancias de tiempo y condiciones de la víctima en el momento de la agresión sexual.

De las diferentes declaraciones de la señora Rosendo Cantú, salvo algunas imprecisiones, se advierte consistencia en lo relatado en cuanto al hecho de la violación sexual. La Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, inconsistencias en el relato. Al respecto, el Tribunal toma en cuenta que los hechos referidos por la señora Rosendo Cantú se relacionan a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos. Dichos relatos, además, fueron rendidos en diferentes momentos desde 2002 a 2010. Adicionalmente, la Corte tiene en cuenta en el presente caso que al momento de ocurridos los hechos la señora Rosendo Cantú era una niña (Caso Rosendo Cantú vs. Colombia, párr. 97).

Si bien en el Sistema Interamericano la responsabilidad es de los Estados, y la carga de la prueba se invierte derivándola hacia el Estado, la prueba del daño que pueda presentar la víctima es determinante para establecer las reparaciones a que hay lugar. La Corte ha enfatizado que el Estado cuenta con un mayor poder para probar hechos que ocurren en su territorio, por lo que su responsabilidad es mayor a la hora de la distribución de las cargas probatorias (párr. 97).

⁴ Este avance se viene dando desde casos como *Lori Berenson vs. Perú*, y se cierra con lo expresado en su jurisprudencia más reciente sobre derechos de las mujeres, casos *Rosendo Cantú*, y *Campo algodonero*. En particular, el párr. 89 del caso *Rosendo Cantú vs. México*.

Los aspectos relacionados en este acápite tienen incidencia en las reparaciones, dado que estos principios aplicados por la Corte están ligados a las formas de resarcimiento que se puedan ordenar a favor de la víctima.

Para resumir, algunas de las reglas claves que se han identificado en materia de violencia sexual por parte de la Corte IDH son las siguientes:

Tabla 1. Reglas sobre reparaciones establecidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Regla	Repercusión para las víctimas	Repercusión en las reparaciones a ordenar
La atención en salud es una obligación estatal prioritaria en casos de violencia sexual.	Esta regla favorece a las víctimas, dado que refuerza la obligación estatal establecida en la Convención Belém do Pará.	El resarcimiento por no haber recibido atención oportuna en salud se maneja de forma independiente a los demás daños sufridos por la víctima y suele representar un rubro específico en las reparaciones pecuniarias.
Análisis de contexto como elemento clave para el estudio de casos de violencias contra las mujeres.	Cada caso es estudiado conforme a sus condiciones particulares, incluyendo las de segregación y vulneración de los derechos de las mujeres.	Las reparaciones ordenadas varían en cada caso dependiendo de las vulneraciones encontradas por la Corte. No hay un modelo de reparaciones como en otros sistemas de responsabilidad estatal.

Flexibilidad en la admisibilidad del acervo probatorio.	La víctima y sus representantes pueden aportar pruebas “indirectas”, sin que estas sean desestimadas.	Se pueden ordenar reparaciones aun por hechos que no se encuentran soportados por prueba “primaria”.
---	---	--

Fuente: Elaboración propia con base en las sentencias expedidas a junio 2015.

Conflictos armados y derechos de las mujeres

Este tema es una de las asignaturas pendientes de la Corte IDH. Pese a que, entre los años setenta y hasta el presente, en algunos de los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos se desarrollaron conflictos armados (de hecho, en uno de los Estados parte, Colombia, el conflicto sigue vigente), no existe una sentencia hito en relación con las afectaciones de las mujeres en el marco de la guerra.

Si bien algunos de los casos contenciosos analizados por la Corte incorporan mujeres dentro de las víctimas, no se ha hecho un estudio detallado de las afectaciones relacionadas con la guerra. Usualmente en los casos adelantados por la Corte, las mujeres son víctimas por la relación familiar con las víctimas directas. Tal es el caso de sentencias como Palacio de Justicia vs. Colombia, Masacre de Ituango vs. Colombia, entre otras. De hecho, la sentencia del Palacio de Justicia es uno de estos casos en donde, si bien la afectación fue similar para todas las víctimas, la Corte no analizó en detalle los efectos del hecho victimizante sobre las mujeres y las niñas familiares de las personas asesinadas y desaparecidas. El caso de la esposa y las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán sirve para ilustrar este punto. Si bien la Corte ordenó al Estado indemnizarlas, no se hizo un análisis detallado de las afectaciones que ellas vivieron luego de los hechos (Sentencia Rodríguez Vera y otros (Desparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, 2014, párr. 134). La Corte le dedica un acápite de la sentencia a establecer si Carlos Horacio Urán salió vivo de las instalaciones del Palacio de

Justicia, pero no se hace un estudio detallado de la forma en que sus vidas se transformaron después de la pérdida de su esposo y padre (párr. 336). Sin embargo, lo ha hecho en otras sentencias, como es el caso *Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia* (2010).

El análisis de los casos colombianos presentados ante la Corte permite evidenciar la necesidad de que se haga un análisis más profundo de las afectaciones experimentadas por mujeres en el marco de conflictos armados como el que vive el país. Los casos de países que han afrontado este tipo de contextos también evidencian la necesidad de afinar el lente diferencial con que la CIDH analiza los casos.

El proceso denominado “Una Comisión de la Verdad para las mujeres”, llevado a cabo por la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, demuestra que el conflicto armado efectivamente tiene unos efectos diferenciales en las mujeres. En este ejercicio, que recolectó cerca de mil testimonios en nueve regiones del país, y que analizo en detalle en un capítulo posterior, las mujeres dan cuenta de la forma como la guerra pasó por sus cuerpos y sus vidas (*Una Comisión de la Verdad para las Mujeres*, 2013).

Estos efectos diferenciales se evidencian en restricciones especiales a las libertades, que pasan desde el control por las formas de vestir de las mujeres, sus conductas, entre otros aspectos, que usualmente no viven los ciudadanos de sexo masculino en los conflictos armados. En sede de la Corte IDH, a la fecha no hay un análisis de estas conductas mediante un caso contencioso. Es decir, no hay una sentencia que haya trabajado a profundidad esas “otras formas” de violaciones a derechos humanos que no encuadran en los esquemas de violaciones a derechos humanos clásicos. Se reitera la falla que se observó en el caso *Campo Algodonero*, en donde ni Comisión ni Corte hicieron un análisis más allá de los homicidios.

De hecho, hay conductas que aún no son reconocidas formalmente por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo los “servicios forzados” que algunos actores armados obligan a las mujeres a

realizar. Pese a que esta conducta es claramente lesiva de los derechos fundamentales de las mujeres, aún no se avanza hacia el reconocimiento de todas las conductas vulneratorias existentes en el marco de los conflictos armados.

Si bien la Corte incluye en sus decisiones un enfoque diferencial de género mediante peritazgos especiales y recepción de opiniones de expertos/as en la materia, aún no hay una sentencia específica que hable sobre el tema. Especular sobre las razones de la ausencia de doctrina jurisprudencial de la Corte a este respecto es complejo, sin embargo, algunos sectores sociales manifiestan que esto se debe a las dificultades que existen para acceder al Sistema Interamericano sin la intermediación de alguna organización con capacidad de hacer litigio internacional.

En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta instancia ha tenido más acceso a casos de víctimas del conflicto armado, en particular del caso colombiano, en su mayoría mediante medidas cautelares para proteger a mujeres y a comunidades en riesgo por causa de la guerra. El caso *X e Hijos vs. Colombia* es uno de ellos. Allí se protegieron los derechos de una mujer indígena víctima de violencia sexual junto con sus hijos menores. De hecho, uno de los avances más importantes que se han dado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el de ampliar la cobertura de las medidas a los hijos e hijas de las víctimas para evitar la separación, con lo cual la Corte hace un avance importante en materia de reparaciones a las mujeres y evidencia la aplicación de un enfoque diferencial.

Afectaciones al proyecto de vida

Una de las reparaciones más frecuentes en la jurisprudencia de la Corte es la relacionada con la afectación al proyecto vital de la víctima y sus familiares. La Corte ha reconocido que en violaciones de los derechos humanos las circunstancias que rodean a la víctima cambian,

afectando sus dinámicas vitales y alterando su posibilidad de desarrollar su vida conforme a sus deseos (Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, 2004).

La Corte IDH, en casos como Rosendo Cantú vs. México, ordenó reparaciones para los familiares de las víctimas, considerando que su proyecto de vida se alteró con la ocurrencia de los hechos. En el caso en mención, la Corte ordenó reparaciones para la hija de la víctima, dado que por causa de la vulneración de los derechos de su madre, la menor debió crecer lejos de su cultura, de su familia y vivir varios desplazamientos. Además, se logró probar que la menor tuvo trastornos psicosociales causados por la situación familiar. Este es un avance importante establecido por la Corte, en virtud del art. 2.º de la Convención Americana de derechos humanos. En el caso Centro de Reeducción del Menor vs. Paraguay, la Corte trabajó en detalle la afectación al proyecto de vida de los niños sobrevivientes al incendio de un centro de reeducación de menores infractores, y de los familiares de las víctimas mortales. Este es uno de los avances más grandes en la jurisprudencia en relación con el daño a la vida y al proyecto vital en general. Sin embargo, no se ha hecho un análisis detallado en lo relacionado con las afectaciones particulares de mujeres. Como se mencionó anteriormente, en casos como el del Palacio de Justicia en Colombia, las afectaciones de las mujeres se han analizado en conjunto con la de todas las víctimas sin tener en cuenta que hay daños diferenciados. Muchas mujeres asumieron el rol de líderes de familia monoparental, siendo las depositarias de muchas cargas emocionales, afectivas y de estigmas en la Colombia de los años ochenta. La Corte no estudió en detalle cómo eso afectó la vida y la dignidad de estas mujeres.

El principio de debida diligencia

En materia de reparaciones, si bien no hay un caso exclusivo en donde se analicen los efectos del conflicto armado en las mujeres, el caso Rosendo Cantú vs. México (2010), en donde la

vulneración de los derechos humanos fue cometida por militares, puede dar luces al respecto (párr. 168). La condena al Estado mexicano se dio en razón al incumplimiento del principio de diligencia debida, según el cual el Estado debe desplegar todas las acciones necesarias para prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres en todas sus expresiones. De hecho, este principio implica que los Estados deben estar preparados para actuar ante una afectación de los derechos fundamentales de las víctimas, y todos sus agentes deben estar capacitados para actuar de forma oportuna y eficaz (párr. 168). En el caso Rosendo Cantú vs. México (2010), la estructura judicial y de salud de México falló en la atención de Valentina Rosendo, como víctima de violencia sexual, cuando debió atenderla integralmente.

Si bien este principio es aplicable a todos los casos tramitados ante la Corte IDH, el propio tribunal lo dotó de una importancia especial al analizarlo en los casos “Campo Algodonero” y “Rosendo Cantú” contra México, a la luz de la Convención de Belém do Pará en su art. 7.º, que contempla las obligaciones estatales en materia de prevención de atención de violencias contra las mujeres (Caso Rosendo Cantú vs. México, 2010, párr. 69).

De esta forma, la Corte ratifica que existe una obligación reforzada de los Estados en materia de prevención y atención de violencias contra las mujeres, dado que hay dos instrumentos internacionales (Convención de Belém do Pará y el Pacto de San José) que establecen de forma expresa la aplicación especial del principio de diligencia debida, tratándose de casos de mujeres.

Esta ratificación de la Corte tiene una incidencia fundamental en las reparaciones, dado que entre más violaciones al derecho Internacional sean probadas, mayores serán los términos de reparación, en cualquiera de las formas que elija la Corte.

La diligencia debida se refuerza cuando el actuar vulneratorio de derechos humanos ocurre por cuenta de agentes estatales. Allí la Corte aplica reparaciones con estándares aún más altos para las mujeres víctimas, dado que se entiende que este tipo de vulneraciones con

origen estatal son aún más gravosas e incumplen una mayor cantidad de obligaciones internacionales de los Estados (párr. 71).

Lamentablemente este principio no siempre es estudiado por la Corte a la luz de la Convención de Belém do Pará. Se extraña en algunos casos este tipo de análisis, dado que los hechos permitirían traer a cuenta violaciones específicas a derechos de las mujeres. En particular, en los casos Mapiripán vs. Colombia, Diario Miliar vs. Guatemala, Operación Génesis vs. Colombia, Santo Domingo vs. Colombia, entre otros, se hace evidente la ausencia de un análisis más detallado de las afectaciones vividas por las mujeres. Si bien muchas de estas falencias en el análisis de casos y la inclusión dependen de la petición que llegue presentada por la Comisión y de lo manifestado por quienes ejerzan la representación de la víctima, la Corte puede hacer uso del principio *iura novit curia*, para hacer un análisis más profundo del caso, aún más allá de las peticiones que lleguen de parte de la Comisión.

Dado que la Corte tiene competencia contenciosa en relación con el art. 7.º de la Convención de Belém do Pará, esto la faculta para condenar a los Estados de forma independiente por las vulneraciones cometidas sobre mujeres, sea por acción u omisión. Sin embargo, en pocos casos la Corte ha hecho uso de esta facultad, limitándose a condenar y a ordenar reparaciones en virtud de la Convención Americana. Los casos Campo Algodonero y Rosendo Cantú representan avances a este respecto, aunque de forma tímida.

Derechos de las mujeres con orientación sexual no normativa

El análisis de la jurisprudencia de la Corte en cuanto a la comunidad LGBTI en materia de reparaciones es también uno de los aspectos a estudiar para determinar si las reglas de reparación empleadas por la Corte IDH incorporan sesgos de género o, si por el contrario, incluyen un enfoque diferencial.

El único caso que ha llegado a instancia de la Corte en relación con reparaciones a la Comunidad LGBTI por causa de la discriminación o la denegación de derechos fundamentales es *Atala Riffo vs. Chile* (2012), en donde se discute la vulneración de los derechos fundamentales de una mujer lesbiana al restringirle la custodia y cuidado personal de su hija.

En este caso, llama la atención que de forma concurrente con las medidas de orden pecuniario se ordenó como mecanismo de reparación y garantía de no repetición la formación a funcionarios públicos en relación con los derechos de la población LGBTI e iniciar procesos de sensibilización a este respecto. Si bien no es la primer vez que este tipo de medidas surgen en el marco del Sistema Interamericano, es la primera vez que se ordena a un Estado sensibilizar a sus funcionarios con el fin de evitar que estos incorporen estereotipos de género en su trabajo.

Estigmatización en razón de la opción sexual y estereotipos de género

En el caso *Atala Riffo vs. Chile* la Corte IDH hace por primera vez una solicitud de reparación en virtud de la aplicación de estereotipos que afectan el proyecto vital de una persona. Dado que la jueza Atala Riffo era una figura pública, el escarnio al que fue sometida a causa del fallo judicial que le revocaba la custodia de sus hijas en razón de su identidad sexual llevó a que viviera una estigmatización por parte de la rama judicial que, en opinión de la Corte, debe ser compensada.

La mayoría de las reparaciones ordenadas en este caso son de orden pecuniario, sin embargo, en el caso en mención se solicita que el Estado haga un reconocimiento público de responsabilidad respecto de los actos discriminatorios contra la señora Atala (*Sentencia Atala Riffo vs. Chile*, 2012). Es importante decir que el reconocimiento público de responsabilidad es una medida solicitada por la representación de la víctima en razón del contexto social y

legal chileno, en donde se restringen una serie de garantías fundamentales a parejas del mismo sexo en virtud de la orientación sexual.

En este tipo de casos, si bien el reconocimiento de responsabilidad es una medida de reparación que inicialmente tiende a favorecer exclusivamente a la víctima que acude al Sistema Interamericano, este termina teniendo un efecto de más largo alcance cuando la conducta sancionada es reiterada. En algunos otros casos, la Corte ha sugerido cambios legislativos respecto de normas que vulneran disposiciones de la Convención Americana o capacitaciones a funcionarios (2012, Punto Resolutivo 6). Llama la atención que en este caso no se haya hecho algo similar, pese a que las normas chilenas son quizá unas de las más restrictivas en materia de derechos de las parejas de mismo sexo.

Si bien es cierto que la Corte ha sido bastante conservadora en lo relativo a sugerir cambios legislativos, amparándose en el respecto al principio de soberanía de los países firmantes de la convención, esta discusión aún no está zanjada. En las audiencias temáticas que se han desarrollado en la Comisión interamericana, aún se está discutiendo si la Corte debería ordenar directamente que un Estado cumpla con el art. 2.º de la Convención Interamericana y adaptar su derecho interno a las disposiciones de derechos humanos⁵.

Diferentes jueces han emitido conceptos diversos en relación con la potestad de la Corte de sugerir cambios legislativos como medida de reparación y en particular como garantía de no repetición. El juez Cancado Trindade, por ejemplo, manifestó en varios de sus votos razonados que las potestades de la Corte incluían sugerir, no ordenar, que se tomen las medidas pertinentes para sacar del ordenamiento jurídico normas que faciliten o por sí mismas representen una vulneración a derechos humanos.

⁵ Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sesión 152, Periodo Extraordinario de Sesiones, agosto 13 de 2014. Audiencia Temática sobre situación de los derechos Humanos en Nicaragua.

En concordancia con lo expresado por el juez Cancado Trindade, considero que una herramienta útil que podría usarse desde la Corte IDH sería el sugerir dentro de sus providencias la eliminación de aquellas normas que eleven a rango legal estereotipos basados en el género o la orientación sexual. Esto no es otra cosa que el “control de convencionalidad”, como principio aplicado por la Corte en virtud del art. 2.º de la Convención Americana, en donde se obliga a los Estados a adaptar su derecho interno a las disposiciones de la Convención. Podría, por ejemplo, ordenar a un Estado eliminar normas que claramente favorezcan condiciones de desigualdad para las mujeres y niñas en salud sexual y reproductiva como una acción afirmativa que garantice la no repetición de hechos que vulneren los derechos sexuales y reproductivos.

Ahora, otra de las consecuencias que se puede desprender de una sentencia en donde la Corte sugiriese un cambio legislativo es que en virtud de ese mismo art. 2.º —y teniendo en cuenta que los fallos de la Corte son parte integral de la Convención o Pacto de San José—, otros Estados diferentes al accionado deban también ajustar sus leyes en el tema específico ordenado por la Corte. Pocas veces los Estados de forma oficiosa deciden hacer cambios legislativos como consecuencia de decisiones de la Corte, y a la fecha no hay sentencias en donde se ordene a un Estado ajustar sus normas al Pacto de San José.

Es decir, lo que sostengo es que si en algún caso la CIDH pidiera a un Estado cambiar una norma específica, o hacer un cambio legislativo o de política pública, por considerar que vulnera la Convención; otros Estados con normas similares deberían en teoría hacer el cambio por control de convencionalidad. También se facilita que organizaciones sociales y ciudadanas incoen acciones para promover esos cambios sustentados en lo dicho por la CIDH.

Lo que pretendo sostener es que si la Corte en una sentencia sugiere u ordena un cambio legislativo en normas que contemplan o refuerzan estereotipos de género, en virtud del art. 2.º

todos los Estados parte de la convención de una u otra forma están en la obligación de hacerlo. Aún no se presenta un caso en donde esta teoría sea aplicada, pero de ocurrir se demostraría una de las hipótesis de este trabajo de grado, según la cual las reparaciones en el SIDH si bien tienen un alcance individual, también logran un alcance general dependiendo del contenido de los puntos resolutivos. Esto es aún mas cierto siguiendo la jurisprudencia sentada en el caso *German vs. Uruguay* (2011), en donde las sentencias de la Corte tienen también un efecto amplio en cuanto a la interpretación de la Convención, que debe iluminar el actuar de los Estados (*res interpretata*). Si una sentencia establece que determinados aspectos normativos son violatorios de la Convención Americana, todos los Estados que tengan normas similares deben, aún sin mediar orden o pronunciamiento directo de la Corte, hacer adecuaciones legislativas.

En el caso *Atala Riffo*, la Corte consideró que no se probó de forma adecuada la manera en que las leyes chilenas contribuyeron en la vulneración de derechos, por lo cual no se dio aplicación al art. 2º de la Convención Americana. Como puede evidenciarse, aún vemos tímidos pasos de la Corte en relación con la garantía de los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, con la creación de la Relatoría Especial de Derechos de la Comunidad LGBTI, se abre la posibilidad de tener en el futuro cercano más casos en donde se defienda la diversidad sexual y se ataquen estereotipos de género.

Orden de ejecutar sanciones a particulares y funcionarios estatales

La Corte Interamericana ha sido renuente a ordenar investigaciones a personas específicas por violaciones de los derechos humanos, dejando en claro que las responsabilidades que puedan acaecer a título personal no son competencia del Sistema Interamericano. Sin embargo, en algunas sentencias de interpretación, la Corte ha aclarado que cuando ordena “adelantar la investigación pertinente” y “buscar la sanción de las personas responsables”, se

está refiriendo a sanciones penales, incluso para funcionarios públicos que tengan relación con los hechos.

En casos como el Penal Castro Castro vs. Perú (2006) e Instituto de Reeducción del menor vs. Paraguay (2004), la Corte ha sido enfática en la responsabilidad reforzada de los Estados y sus funcionarios cuando se trata de personas privadas de la libertad (2004, párr. 161). Sin embargo, no ha hecho mayor referencia a las investigaciones penales que deban adelantarse. Bajo la fórmula “adelantar la acciones judiciales pertinentes”, la Corte ha evitado hacer alusiones específicas a responsabilidades personales. Solo en los casos Ituango vs. Colombia y la Rochela vs. Colombia se hace una alusión específica a los nombres de las personas que la Corte considera que deben ser investigadas, aunque solo lo hace a modo de “sugerencia”.

Si bien es entendible que la Corte siente postura en relación con su competencia como un tribunal para Estados y no para personas, sí valdría la pena que tuviese en cuenta que la no investigación de hechos vulneratorios de derechos humanos cometidos por particulares representa una responsabilidad del Estado, que por omisión denegó el acceso a la justicia al no adelantar el proceso pertinente. La Corte podría ordenar reparaciones referidas a la investigación y a la sanción de los perpetradores directos, en aras de un debido proceso y con miras a garantizar el acceso a la justicia por parte de la víctima.

La sentencia como una forma de reparación *per se*

Uno de los aspectos comunes a casi todas las sentencias de la Corte IDH es la consideración de la sentencia como una forma de reparación por sí misma. Esto ocurre también en los casos que hemos venido analizando a lo largo de este capítulo en relación con la violación de los derechos humanos de las mujeres.

La Corte ha dicho que la sola sentencia es una forma de resarcir a la víctima en su búsqueda de justicia, y su contenido representa un reconocimiento para la víctima y la culminación de la vulneración a sus derechos (Casos el Amparo vs. Venezuela, Reparaciones, párr. 35, y Neira Alegría vs. Perú y otros, Reparaciones, párr. 56). Este es un aspecto ampliamente discutido, dado que puede considerarse que la sentencia, si bien es una herramienta de reparación, no podría por sí misma ser resarcimiento para la víctima. Después del fallo viene un largo proceso de cumplimiento y negociación con el Estado para que ejecute las órdenes de la Corte Interamericana.

Dado que la Corte es la intérprete de la Convención Americana, y entendiendo que en su artículo 66 da cuenta de los mecanismos de reparación, la Corte IDH está actuando en legal forma al determinar que sus sentencias son ellas mismas una forma de reparación.

La pregunta para plantear es si efectivamente puede una sentencia por sí misma ser una forma de reparación para las mujeres, en aquellos casos en donde esta no da cuenta de las afectaciones especiales vividas por ellas. Una muestra que nos permitiría ejemplificar esta situación es el caso de las masacres Colombianas, como Mapiripán, Ituango y Pueblo Bello (Sentencias Pueblo Bello, Masacre de Mapiripán, Ituango y Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencias de Fondo, Reparaciones y Costas). En ninguna de las sentencias sobre estos casos se hace alusión a afectaciones específicas sufridas por las mujeres, pese a que la representación de la víctima las menciona en el escrito de solicitud. ¿Puede en estas circunstancias una mujer considerar que está siendo reparada con la sola publicación de la sentencia? Para la Corte Interamericana, la respuesta es que efectivamente todas las víctimas de un hecho reciben parte de su reparación con la sola expedición de la sentencia. Sin embargo, estimo que esto solo aplica cuando en la sentencia se hace mención expresa de las afectaciones que viven las mujeres, teniendo en cuenta sus contextos y los impactos como resultado de esos hechos que en general desestructuran su proyecto de vida, su ser y estar en

el mundo, su salud física, psíquica y emocional, entre muchas otras afectaciones que suelen ser diferentes a las de las víctimas varones.

No se puede pedir, por ejemplo, a una mujer víctima de la masacre de Ituango, cuyas afectaciones particulares fueron servicios forzados o violencia sexual entre otras, y que no fueron mencionadas por la Corte, a pesar de ser parte de los hechos, que se sienta reparada por el texto de la sentencia.

La Corte en el caso Masacre Plan Sánchez vs. Guatemala demostró que sí puede hacer alusión específica de los derechos de las mujeres en el marco de casos con múltiples víctimas. Este caso tiene una característica especial, dado que hubo reconocimiento de responsabilidad estatal, aunque dentro de la sentencia de fondo se estableció que las mujeres y las niñas fueron separadas y maltratadas durante la masacre. ¿Por qué no aplicar este mismo estándar a todos los casos? En el caso Masacre de las dos Erres vs. Guatemala, la Corte nuevamente trabaja de forma específica en los derechos de las mujeres, demostrando que sí es posible. La Corte estudió las afectaciones a mujeres embarazadas que fueron asesinadas y el trato indigno que se dio a las mujeres el día de la masacre (párr. 89).

Para concluir este punto, haría falta que la Corte hiciese mención frecuente de los daños acaecidos sobre mujeres en razón de discriminación, inequidad, entre otras conductas, para poder dar aplicación a la teoría jurisprudencial que otorga un papel reparador a las sentencias proferidas en el marco del Sistema Interamericano.

Lo general y lo abstracto

En general, la Corte IDH ha suscrito una serie de reglas de reparación, de las que rara vez se aparta. Hay una fórmula bastante común para estas reparaciones, una de las cuales es ordenar al Estado ejecutar “cualquier medida necesaria” para atender las necesidades de las víctimas. El caso de Masacre Plan Sánchez vs. Guatemala es ejemplo de ello. Allí se ordenó al Estado

procurar que las mujeres víctimas se recuperaran de los impactos que les dejó la masacre, mediante la ejecución de “cualquier medida tendiente a garantizar el bienestar físico y mental de las víctimas” (párr. 49). De hecho, en esta sentencia dentro de los hechos reconocidos por la Corte están las torturas y violaciones a mujeres y niñas. Sin embargo, las reparaciones ordenadas son “garantía de atención requerida”, en general, sin detallar las afectaciones vividas.

La pregunta a hacerse es la siguiente: ¿resulta esta fórmula de reparación adecuada? Si bien esta tiene en principio una intención de abarcar todos los daños y proteger al máximo a las víctimas, en la práctica puede generar evasión de las obligaciones estatales, dado que, al no haberse ordenado una medida de reparación en específico, el Estado puede aducir que ha cumplido con la medida presentando prácticamente cualquier tipo de acción.

Los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su mayoría cuentan con sistemas estatales llenos de requisitos y formalismos jurídicos que en ocasiones terminan representando un obstáculo para el pronto y eficaz otorgamiento de reparaciones. La fórmula de reparación “cualquier medida tendiente a” favorece que los Estados puedan considerar esto como un vacío jurídico y adoptar medidas de poco impacto a favor de las víctimas.

En los casos de afectación de los derechos fundamentales de las mujeres, se hace más necesario que la Corte de órdenes específicas, dado que los sistemas de salud y atención de mujeres en las Américas suelen tener amplias deficiencias. Si se deja al arbitrio de los Estados el tipo de medidas que se van a tomar, puede que no estén a la altura de las necesidades de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. De hecho, al acudir al Sistema Interamericano, las víctimas ya han agotado los recursos internos, resultando estos insuficientes para atender sus necesidades. Se hace entonces necesario que la Corte dé

directrices específicas para atender los casos y que dé los estándares mínimos que espera respecto de las reparaciones.

Reparaciones simbólicas

Estas medidas son usadas por la Corte IDH en muchos de sus casos, para lograr que se conserve la memoria histórica de lo ocurrido. En los casos de violación de los derechos humanos de las mujeres, el caso emblemático a este respecto es Campo Algodonero vs. México, en donde se ordenó la construcción de un monumento en honor a las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez.

Este tipo de reparaciones, si bien es bastante común de parte de la Corte, tiene un valor adicional cuando se trata de derechos humanos de las mujeres. Dado que estos delitos suelen ser los más invisibilizados y los que menos respuesta social incorporan. Los monumentos y demás medidas simbólicas que garanticen la memoria sobre lo ocurrido permiten dar un paso adelante en la superación de la invisibilidad de la realidad de las mujeres.

Llama la atención que en ninguno de los casos en donde mujeres han sido afectadas en el marco del conflicto armado la Corte haya ordenado aún reparaciones simbólicas específicas para ellas, en los casos de las masacres colombianas, o en el caso Masacre dos Erres vs. Guatemala, pudo haberse ordenado algún tipo de medida simbólica específica para las mujeres víctimas.

En este tipo de reparaciones suele pasar algo parecido a lo que ocurre con la transversalización del enfoque de género en políticas públicas. Lo general absorbe lo particular y los temas relacionados con las mujeres tienden a perderse. Las reparaciones simbólicas que se ordenan “en general” para todas las víctimas tienen un valor muy importante dentro del proceso de resarcimiento, pero en contextos de reiterada violencia y discriminación contra las mujeres sería muy efectivo hacer medidas que visibilicen y den un

valor simbólico independiente a las afectaciones que han vivido las mujeres de manera especial.

En casos como *Ituango vs. Colombia*, resultaría valioso contar con un monumento específico que honrara a las mujeres víctimas de esta masacre y lograra visibilizar las afectaciones específicas que vivieron. En contextos de violencia y desigualdad estructural respecto de las mujeres, esto resulta una medida que dignificaría el nombre de las víctimas.

Este tipo de medidas no son complejas de aplicar desde la técnica jurídica y permiten a los países responder de forma más eficaz a las violaciones a derechos de las mujeres.

Reparaciones en casos de crímenes cometidos por particulares

Los crímenes cometidos por particulares han representado uno de los retos más interesantes para el Sistema Interamericano en materia de reparación. En principio, algunos de los casos llevados contra Colombia pusieron sobre la mesa la discusión sobre la eventual necesidad de crear estándares específicos de reparación para aquellos casos en que la violación de los derechos humanos provenga de particulares. Sin embargo, actualmente la jurisprudencia ha sido clara en que las reparaciones son exactamente iguales en casos de responsabilidad directa e indirecta (*Caso Masacre del río Cacarica vs. Colombia*, 2013, párr. 120). Este criterio aplica en casos donde particulares agreden a mujeres. Teniendo en cuenta los antecedentes de violencias “privadas” contra las mujeres, sostener que el Estado es responsable de esas agresiones por omisión implica que todos ellos deben tener una política pública seria de prevención y detección temprana de violaciones de los derechos humanos de las mujeres. En la jurisprudencia de la Corte el tema se ha abordado de manera general, más no desde un enfoque de género. En casos como el Colombiano, hay masacres cometidas por grupos al margen de la ley, como responsables directos, pero el Estado responde en subsidio al no haber evitado que estos grupos existieran y terminaran afectando a su población. Si bien

en principio se pensó que la responsabilidad directa resultaba más grave, y la Corte ha dicho que reviste la misma gravedad la responsabilidad por omisión. De hecho, en casos iniciales como Niños de la Calle vs. Guatemala (1999), la Corte ha dicho que es igualmente grave que el Estado permanezca inactivo y no prevenga violaciones a derechos humanos en su territorio.

El caso Campo Algodonero vs. México es uno de aquellos en donde el Estado es condenado por no prevenir ni evitar violaciones presuntamente ocurridas por particulares (Sentencia de Fondo Reparaciones y Costas, Parte Resolutiva, 2009). Los estándares de reparación usados no variaron en relación con los usados por la Corte en otros casos. Las reparaciones en el Sistema Interamericano se otorgan sobre la base de varios criterios, siendo el más importante el análisis de las afectaciones que la representación de la víctima haya podido probar. En el caso mencionado, las reparaciones se centraron en el análisis de la afectación a toda la comunidad y en el temor generalizado que las desapariciones de mujeres causaron en la comunidad de Ciudad Juárez. Si bien se reparó a los familiares de las víctimas, también se hizo una solicitud al Estado mexicano respecto de actos conmemorativos y garantía de la memoria. Aquí la Corte reconoció que los feminicidios pueden tener un impacto en la sociedad en general (párr. 133).

En los casos relacionados con el conflicto armado, si bien es posible que haya violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, otras son cometidas por particulares o agentes armados no estatales. Los estándares de reparación no varían en estos casos, dado que la Corte ha aclarado que la obligación del Estado de proteger a los civiles es igual de importante desde el punto de vista jurídico a la obligación de no agredir bajo ninguna circunstancia a las/os ciudadanas/os.

Una medida que bien podría tomar la Corte para garantizar la reparación, específicamente en casos de violación de los derechos humanos de las mujeres, es crear estándares de sanción

más gravosos para aquellos casos en donde, si bien el hecho vulneratorio de derechos fundamentales haya sido cometido por particulares, el Estado haya incumplido con el art. 7.º de la Convención Belém do Pará, sustrayéndose de la obligación de crear medidas de prevención de la violencia contra las mujeres. Desde este punto de vista, al dar relevancia de los derechos humanos de las mujeres mediante la habilitación legal de la Corte para sancionar por hechos vulneratorios de la Convención de Belém do Pará y demandar su cumplimiento de forma efectiva mediante estándares más elevados para las reparaciones, podría ser un mecanismo eficaz para darle cabal cumplimiento a este instrumento internacional.

Los Estados tienen un deber de acción positiva respecto de grupos históricamente discriminados

Todo lo anterior puede enmarcarse, a su vez, en la teoría del “riesgo previsible y evitable”, inspirada en varios pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, en donde la Corte ha señalado que los Estados son responsables cuando permiten que ocurran violaciones de los derechos humanos que pueden ser prevenidas o de las que haya un previo conocimiento sobre la posibilidad de su ocurrencia. En esta teoría del “riesgo previsible” (párr. 110), se deben dar cuatro elementos para otorgar reparaciones a favor de la víctima: 1) la existencia de un riesgo inminente e inmediato que afecte derechos fundamentales, 2) que ese riesgo recaiga sobre un grupo de personas o una persona en particular, 3) que el Estado conozca el riesgo, 4) que el Estado pueda prevenir el riesgo (Caso masacre de Ituango vs. Colombia, 2006, párr. 185). Los casos llevados a la Corte IDH contra Colombia son un ejemplo de un riesgo previsible. Si hay presencia de grupos armados en la zona, y estos tienen como práctica usual las agresiones a mujeres, es perfectamente previsible el riesgo que tienen. En el caso colombiano, el país cuenta con un Sistema de Alertas Tempranas en su Defensoría del Pueblo que permite prever riesgos.

Si se traslada este análisis del riesgo previsible a los delitos contra las mujeres y sus afectaciones a derechos humanos, la mayor parte de los riesgos que viven las mujeres son previsibles teniendo en cuenta que existen múltiples informes en donde se da cuenta del peligro que viven continuamente en todos los países de las Américas y el Caribe. Esto llevaría a que las reparaciones que la Corte otorgue respecto de violaciones de los derechos de las mujeres fuesen más gravosas en razón del “riesgo previsible” y al mismo tiempo se activaría la competencia de la Corte respecto del art. 7.º de la Convención Belém do Pará. Ya los informes de seguimiento a la CEDAW y a la Convención Belém do Pará, así como los informes temáticos de la Relatoría Especial de las mujeres de la CIDH, han advertido el riesgo inminente, por lo que los feminicidios y demás violaciones a derechos humanos de las mujeres son entonces previsibles y los Estados deben tomar medidas serias para evitarlos. De aquí que sostenga que, ante estas advertencias que el Sistema Interamericano y universal le hacen a los Estados, su responsabilidad a la hora de proteger a las mujeres es reforzada.

Una vez analizadas las decisiones de la Corte Interamericana en materia de reparaciones, pasaré a analizar las reflexiones de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia en relación con lo que quieren y esperan de las reparaciones. Esto con el fin de aterrizar los principios de reparaciones con sentido de realidad, desde una perspectiva crítica sobre su utilidad para cumplir el fin de resarcir a las víctimas.

Capítulo 3

Las demandas de reparaciones en la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado

Para analizar las reparaciones desde el punto de vista de su efectividad e impacto, resulta imprescindible hacerlo desde las voces de las víctimas. Para ello, me basaré en un ejercicio de una organización de mujeres que se propuso recolectar testimonios relacionados con la forma en que el conflicto afectó los cuerpos y las vidas de las mujeres en Colombia. El ejercicio se denominó “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”, en adelante Comisión de la Verdad (CVM), proceso llevado a cabo desde la perspectiva de las mujeres, que nace de la concertación para realizar una investigación en el campo de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano.

Esta experiencia desde las mujeres fue presentada en noviembre del 2013 ante organismos del Estado, organizaciones sociales, comunidad internacional, academia, entre otros: Ha sido presentada en ámbitos académicos en España, Perú, Salvador y en diversas universidades del país, Universidad de Medellín, Universidad de los Andes, Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa en Huila, Universidad Pedagógica, Universidad Autónoma de Medellín. Ha sido escuchada de forma directa por alrededor de 18 000 personas en diferentes regiones del país.

La iniciativa fue llevada a cabo por la Ruta Pacífica de las Mujeres —en adelante, Ruta Pacífica—, un movimiento feminista colombiano, cuyo trabajo desde hace dieciocho años ha estado centrado en la búsqueda de una salida negociada del conflicto armado desde una postura pacifista y antimilitarista, y unido a esto ha develado las atrocidades que las mujeres han sufrido como consecuencia de este. Uno de sus últimos trabajos fue llevar a cabo una

Comisión de la verdad y memoria desde las mujeres, una iniciativa única en el mundo, siendo un aporte importante al proceso de negociación que se está desarrollando entre el gobierno y una de la guerrillas más antiguas del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (Farc-EP).

La Comisión de la Verdad fue una experiencia contada por sus protagonistas, las víctimas del conflicto armado, 1000 mujeres, mas de 900 entrevistas individuales y 9 casos colectivos de mujeres recogidos a través de testimonios que narran los hechos, impactos y afrontamientos desde su subjetividad, creando un espacio para la escucha, la descarga y el acompañamiento donde el centro de la narrativa es la vida de las mujeres afectadas por la gravedad de dichos hechos.

Contenido de la investigación de *La verdad de las mujeres*

El informe contiene cuatro capítulos distribuidos en dos tomos: en un capítulo se encuentra el análisis y el marco conceptual de las violencias encontradas en los testimonios de las mujeres, desde un análisis de las violencias estructurales que tienen las mujeres en razón de su género y de cómo esto se traslada al campo de contexto de conflicto armado, seguido de los impactos y las formas como las mujeres afrontaron los hechos, en respuesta a los impactos producidos, donde se evidencia la capacidad de resistencia, resiliencia y reconstrucción que han tenido las mujeres tanto individual como colectivamente. El otro capítulo se refiere a los hechos que le ocurrieron a las mujeres desde su perspectiva, es decir, no se trataba solo de la pregunta por lo que sucedió, sino cómo les sucedió, explorando de qué manera ellas vivieron esos hechos, tras lo cual se presenta la documentación de nueve casos colectivos y las demandas de reparaciones a las que las mujeres aspiran, y finalmente se plasman las conclusiones y recomendaciones que deja este trabajo, junto con la información estadística correspondiente.

La presente tesis solo se centrará en el capítulo de las reparaciones referidas a las demandas de las mujeres en cuanto a la reparación de los daños causados por las violaciones a sus derechos en el marco del conflicto armado.

Acerca de la cobertura geográfica de los testimonios tomados

La investigación se concentró en 11 departamentos: Antioquia Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Valle, Nariño y Bogotá. Sin embargo, se recogieron testimonios de mujeres cuyos hechos victimizantes tuvieron ocurrencia en 22 departamentos y al menos en 80 municipios del país.

En la Comisión de la Verdad y memoria de mujeres colombianas las mujeres que brindaron su testimonio fueron en un 47% mestizas, 26% fueron afrocolombianas, un 6% indígenas y un 21% se consideraron de otras identidades étnicas (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 18).

Por otra parte, la Comisión de la Verdad encontró que

La media de violaciones referidas está entre 4 y 5 por cada mujer de diferentes tipos de violencia y un 25% de mujeres entrevistadas refiere mas de 6 tipos de violencias, así mismo las mujeres entrevistadas hicieron referencia a entre una y dos víctimas más de su entorno familiar, reportando en todo el informe 2450 (p. 18).

Enfoque metodológico

Para el logro de este trabajo, la Ruta Pacífica se centró en la definición de la metodología que recogiera el enfoque del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, desde una concepción feminista, antimilitarista y pacifista⁶, con el foco en lo que le sucedió a las mujeres

⁶ Esta concepción se alimenta de los diferentes feminismos que existen, buscando con este enfoque de trabajo y análisis desentrañar las causas, consecuencias sobre la gravedad de las violencias contra las

entrevistadas y desentrañando lo que sucede a las mujeres como colectivo social en contextos de guerra. La investigación tiene como énfasis el protagonismo de las mujeres, una memoria colectiva e investigación de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el caso de Colombia.

Para llevar a cabo este propósito, la Ruta Pacífica se decide trabajar desde varios enfoques metodológicos:

Desde la epistemología feminista, los derechos de las mujeres, la Investigación acción participativa, el enfoque psicosocial y desde los aportes de comisiones de la verdad.

Estos enfoque pueden resumirse en,

El feminismo es teoría y práctica plural que engloba diversas percepciones, distintas elaboraciones intelectuales y diferentes propuestas de actuación derivadas en todos los casos de un mismo hecho, la subordinación y opresión de las mujeres en las sociedades patriarcales. Como ha señalado Valérie Bryson, la teoría feminista puede considerarse una teoría explícitamente comprometida, “que quiere entender la sociedad con el objeto de desafiarla y cambiarla. Su objetivo no es el conocimiento abstracto sino el conocimiento susceptible de ser utilizado como guía e informar para la práctica política feminista” (Sánchez, 2003, p. 14).

Este enfoque para la elaboración de la Comisión de la Verdad se centra en las mujeres que darían su testimonio, tomando en cuenta sus narrativas, la subjetividad implicada en cómo se

mujeres en el conflicto armado, lo que se traduce en que la cultura, el capitalismo, el Estado y la guerra son parte del mismo orden simbólico: el patriarcal y en la guerra solo se expresa de la forma que por excelencia se utiliza: la violencia y el desprecio por las mujeres en forma exacerbada. De otro lado, recoge las experiencias de las mujeres feministas en el mundo para enfrentar la guerra desde la Primera Guerra Mundial y los extensos conflictos armados donde las mujeres se han opuesto a la guerra y a las violencias.

vivieron los hechos relatados desde sus voces. La investigación fue realizada desde una visión de proceso donde las mujeres víctimas fuesen reconocidas, acompañadas y su voz escuchada, y planteó como objetivo contribuir a la búsqueda de la reparación que transforme la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado y que constituya un aporte hacia la superación de la impunidad de las violencias estructurales contra las mujeres en Colombia. Dichas violencias se analizan desde las condiciones estructurales de subordinación y discriminaciones históricas de las mujeres, que en un contexto de cinco décadas de conflicto armado se han agravado y multiplicado.

Creo que hay dos aspectos en los cuales están concentrados el enfoque feminista en los relatos. Uno es lo que tiene que ver con el continuum de violencias porque se ratifica de una manera contundente. Pasa de ser una hipótesis a una constatación, una realidad. Y el segundo elemento creo que tiene que ver con las marcas en el cuerpo de las mujeres. En todas las entrevistas, o en las que yo leí, salen las marcas, la enfermedad, la afectación física de las mujeres. La lupa del feminismo es constatar que el tema de las violencias sí es definitivamente atroz, y el cuerpo de las mujeres es el receptor de las violencias (Carla, A. y Beristain, M., 2013, p. 20).

Un segundo enfoque es que fuera una investigación en el campo de derechos humanos de las mujeres que pone el énfasis en la experiencia de las víctimas, llevándolo a terreno del derecho a la verdad, justicia y la reparación⁷, que son los estándares internacionales para las víctimas, especialmente en conflictos armados.

⁷ Como consecuencia de las graves y masivas violaciones de los derechos humanos en las guerras o en las dictaduras militares, se han venido desarrollando, en los siglos XX y XXI, los principios sobre los derechos de las víctimas. Estos derechos se han venido aplicando como estándares para la satisfacción de las víctimas frente a las graves atrocidades cometidas por estados u organizaciones armadas. Este trabajo avanza en la aplicación de estos estándares a partir de una perspectiva de las violaciones de los

Una tercer enfoque está en poner en práctica la Investigación Acción participativa (IAP)⁸. Las 1000 mujeres entrevistadas debían ser el sujeto de investigación, implicaba el cuidado en la búsqueda de las mujeres, su participación activa en el proceso de dar su testimonio, el saber que su aporte podría tener implicaciones para una reparación real y simbólica de las mujeres en el país, el camino hacia una reparación transformadora de las violencias, entre otras. Un segundo elemento fue la mediación de las mujeres entrevistadoras y las mujeres víctimas entrevistadas. Las mujeres entrevistadoras son mujeres base social del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, algunas de ellas también víctimas; el logro fue el enlace entre las dos subjetividades (quien habla y quien escucha) partiendo de la credibilidad de esa narración, reconociendo el dolor de la otra, sintiéndolo desde sus propias experiencias, también dolorosas; es lo que algunas teóricas nombran como la “escucha compasiva”, la cual hace referencia a la comprensión desde su propia experiencia y subjetividad. Todo el proceso estuvo acompañado de este enfoque desde la toma de los testimonios, la transcripción la codificación, la elaboración de los capítulos y la devolución que se hizo con las mujeres víctimas después de publicado el informe.

Desde el enfoque de IAP, las mujeres fueron consideradas como sujetos que participaban en la investigación y contribuían a la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.

Las mujeres voluntariamente aceptaron dar su testimonio. Fue lo más importante que quisieran hablar conmigo, la confianza que me brindaban. En medio del dolor y el recuerdo,

derechos humanos de las mujeres que en contextos de paz o de conflictos armados permanecen, haciendo énfasis en el conflicto armado colombiano.

⁸ Método de investigación cualitativa que busca beneficiar a las comunidades y colectivos a investigar. Busca que las propias comunidades sean actoras de la acción a investigar y participen en todo el proceso, en las preguntas diseño, desarrollo y propuestas a fin de cualificar su intervención social. Los colectivos son sujetos de la investigación.

las mujeres aún sonríen. En los municipios se construyeron equipos de apoyo. Pudimos recoger las historias que no habían sido muchas veces contadas. Lo más importante, el agradecimiento por haberlas escuchado (p. 20).

Otro de los enfoques definidos es el acompañamiento psicosocial⁹. El proceso de documentación se llevó a cabo con el cuidado necesario para que las mujeres se sintieran reparadas con el mismo proceso. Todo el proceso estuvo diseñado, para que las mujeres se sintieran apoyadas y en caso necesario el acompañamiento psicosocial con mujeres profesionales.

Un quinto enfoque fue el realizarlo desde una metodología de comisiones de la verdad, recogiendo experiencias de otros países y colocando el plus de una comisión hecha por y para las mujeres. Esta experiencia, inédita en el mundo, se constituye en un aporte central para recoger la situación y experiencia de las mujeres en comisiones de la verdad, que hoy por hoy son un mecanismo esencial de paz, reconciliación y de reparación.

Las reparaciones para las mujeres frente a violencias en el contexto del conflicto armado

Para las mujeres testimoniadas de la Comisión de la verdad de las mujeres, el acercamiento a las medidas de reparación es lejano, lo que es explicable porque aún en Colombia la reparación —a pesar de la existencia de la Ley 1448 del 2011 y otras medidas de tipo administrativo con relación a ella— esta no es de fácil acceso; pero esto tiene lugar además por otra razón: porque para las mujeres, cualquier medida que se les otorga apenas puede

⁹ Entendido como “el proceso de acompañamiento individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos y promover el bienestar, el apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el desarrollo de sus capacidades” (Beristain, M., 2012).

cumplir algún papel en la reparación del sufrimiento infringido. Para la mayoría son irreparables los hechos e impactos que desestructuraron su vida.

Los conceptos y las medidas tradicionales en materia de reparación en el derecho internacional de los derechos humanos, no son de fácil comprensión y mucho menos de rápida apropiación por parte de las mujeres. Para algunas es un concepto incomprensible porque en su experiencia es imposible tratar de reparar lo irreparable (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 369).

Lo que piden las mujeres en medidas de reparación está marcado por los contextos en que se desarrollaron los hechos y los afrontamientos realizados por ellas, su biografía, el tipo de violencia que vivieron, entre otras cosas, sin embargo hay confluencia en sus demandas, No obstante esto no significa que sus demandas sean semejantes. Como lo expresa la Comisión de la Verdad, aunque algunas enuncien con frecuencia ciertas ideas, lo que cada una entiende de ellas mismas depende de factores que acompañan su experiencia vital (p. 369).

Por la experiencia que las mujeres han tenido en materia de reparación o políticas públicas, como la sentencia que ordena al Estado la superación del estado de cosas inconstitucionales en que viven las mujeres víctimas del desplazamiento (Auto 092 de la Corte Constitucional 2008), estas medidas, aunque no constituyen una reparación, las mujeres lo asimilan a esta, especialmente en relación con la ayuda humanitaria y subsidio de vivienda. Las mujeres lo asumen como un auxilio que el Estado buenamente otorga y no como un derecho por los daños que sufrieron producto del conflicto armado, que las llevó a tener impactos desproporcionados, de los cuales el Estado no quiso o no pudo protegerlas.

La reparación es un concepto que aún no tiene una comprensión general, las mujeres aun ven las acciones del Estado como un “dar”, asimilable a un subsidio por lo que les pasó, no como un derecho que fue violado o vulnerado por la acción u omisión del Estado y que debe ser reparado.

Reclaman entonces su derecho a conocer la normatividad y los aspectos prácticos de su atención y trámite: a dónde ir o qué se debe hacer para solicitar las ayudas correspondientes o para acceder a los programas de reparaciones. Estos son algunos de los interrogantes más frecuentes que se hacen las mujeres (p. 371).

El derecho a la reparación para las mujeres.

Adicional a la inoperancia del Estado y la falta de compromiso con la reparación integral a las víctimas, y de dar respuestas oportunas a la situación que han soportado durante largos años debido a las violaciones a sus derechos humanos, las reparaciones continúan siendo una aspiración casi inexistente y con escasa apropiación por parte de las mujeres como un derecho fundamental de carácter internacional.

A continuación enumeraré algunas de estas razones.

Lo irreparable por los hechos que las impactaron.

En la demanda de reparación que las mujeres testimoniante reclaman hay una paradoja, dado que para ellas lo que tuvieron que vivir como consecuencia de los hechos que sufrieron es irreparable, ninguna medida puede devolver a sus seres queridos, ni recuperar la vida que dejaron de vivir; asumen lo que pasó como un hecho consumado que no puede reponerse con ninguna medida de compensación o con medidas simbólicas. Para las mujeres, el quiebre en su proyecto de vida, los seres queridos que perdieron, la tranquilidad arrebatada, los bienes materiales perdidos o expropiados, la vida desperdiciada, entre muchos otros impactos, representan una realidad que no puede ser reparada con nada.

“Eso no me lo compone nadie. ¿Sabe por qué? Porque a esos que mataron ya no hay quien los reviva. Yo no necesito plata. Yo lo que necesitaba era a mi hijo porque era quien me ayudaba”.
Testimoniante, Buey, Chocó (p. 380).

La desconfianza en la institucionalidad pública para ser reparada.

Para muchas mujeres, impera la desconfianza sobre la capacidad del Estado para responder con estas medidas, pues las múltiples violencias que han padecido, la continuidad del conflicto armado y otros actores armados que permanecen en su cotidianidad son factores que hacen que se sientan en constante riesgo de repetición.

Además, las mujeres se sienten revictimizadas cuando demandan apoyos institucionales debido a la precariedad en que quedaron, la inadecuada atención y aunado a esto porque las fuerzas militares del Estado han sido parte de los perpetradores de los hechos victimizantes.

En verdad yo no quiero al Estado. Por eso es que en mi vida nunca he votado, porque nunca he creído en ningún gobierno. Hay plata para las armas y las violencias y a los pobres nunca nos tienen en cuenta para nada... A mí esos cuentos de víctimas me dan hasta rabias. Corregimiento Belén de Bajirá, Antioquia, 1992 (p. 370).

Para las mujeres, la responsabilidad de la reparación es del Estado, pues debe ser quien brinde garantías para continuar su vida de manera digna y restablecer los derechos. Esto debe hacerse con la erradicación de las causas que posibilitaron los hechos que las victimizaron.

Lo que yo más le exigiría al Estado, serían garantías de toda índole. Garantías que me permitan a mí ejercer mi vida como profesional, que mi familia pueda tener una vida tranquila, que mi hermano pueda hacer su trabajo, que podamos vivir en tranquilidad en este país. Precisamente eso se une mucho a la reparación moral de todos estos daños que han generado, pero serían garantías, desde lo más mínimo como un desplazamiento, hasta finalizar con erradicar la situación. No es solamente garantías en medio de la situación, sino también la garantía de que esa situación va a acabarse y que voy a volver a estar en mi estado inicial. Popayán, Cauca, 2006 (p. 371).

La falta de información y de conocimiento del sistema para el acceso a las medidas de reparación.

La desinformación, la tramitología, la exigencia de pruebas, son recurrentes en los testimonios. No se conocen los mecanismos para el acceso a las reparaciones y para las mujeres cuyas precariedades económicas se han visto agravadas por los impactos que han tenido. Se vuelve oneroso los gastos en que deben incurrir para lograr hacer los trámites adecuados.

La normatividad también es difícil y ardua para su entendimiento, y se dan casos en que los funcionarios tampoco tienen la idoneidad para orientar los trámites que se requieren, lo que en muchas ocasiones hace que las mujeres desistan o se generen cansancio e imposibilidad de hacer las reclamaciones.

Bueno, para mí exigiría que nos respeten, que si en verdad somos víctimas de la violencia que sean serios con nosotros. Respetar el dolor ajeno en el sentido de que le prometen a uno cosas que no las ve sino promesas. El gobierno dice que nos va a dar ayudas humanitarias, que nos va a reparar, que nos va a dar. Ya son once años y no hemos recibido nada. Salaminita, Magdalena, 1990 (p. 371).

La indignidad con que son tratadas como víctimas.

Parte de las afirmaciones de las mujeres está centrada en la forma como son tratadas como víctimas. Hay una falta de reconocimiento, de creencia en su palabra sobre lo que les pasó, terminando por estigmatizarlas y exponerlas a nuevos riesgos de victimizaciones, y en no pocas ocasiones llevadas hasta la mendicidad. Además, se sienten tratadas en términos desiguales con respecto a víctimas de mayor poder político o social.

Yo por ejemplo no fui a la Red de Solidaridad Social, porque me parecía indigno, una vez intenté acompañar a alguien, que para que les dieran el auxilio de vivienda y de alimentación, y

eso eran unas colas y unos trámites. Si yo por ejemplo que he tenido, la posibilidad de estudiar, que soy profesional, que al menos entiendo cómo funciona el Estado, y me parecía súper engorroso todo lo que había que hacer, y veía casos de personas campesinas, en una manipulación de esa población terrible, y yo no fui, finalmente no lo acepté, por eso, aunque duela. Tendría que reconocerse a los desplazados como víctimas, y no para tenerles lastima, la lástima indignifica a las personas. Piamonte, Antioquia, 1998 (p. 372).

La no tramitación de la búsqueda de los desaparecidos.

Otro de los elementos expuestos por las mujeres tiene que ver con la falta de verdad y de justicia sobre los hechos acaecidos a sus familiares. Para las mujeres, en el proceso de Justicia y Paz¹⁰ lo que principalmente se evidenció fue la falta de una verdad desde el respeto por las víctimas y la justicia que está íntimamente ligada al conocimiento de la verdad. Además, la falta de dispositivos efectivos frente a la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas es un elemento que no les permite hacer un cierre emocional por la falta de elaboración del duelo, de hacer las ceremonias de despedida y de encontrar los cuerpos o los restos para tener certezas. Todo ello les ha generado un incalculable impacto a las mujeres, que se traduce en mayores cargas afectivas y consecuencias en su salud física y mental.

“La reparación es muy difícil, más que todo, para los desaparecidos y desaparecidas, para los que han sido asesinados”. Bogotá, D. C., 2003 (p. 373).

La vigencia del conflicto armado

Otro de los aspectos que mayor desconfianza genera en cuanto la realización de las reparaciones a través de la ley vigente es la persistencia del conflicto armado, aspecto que resaltaré más adelante puesto que fue una medida que las mujeres expresaron reiteradamente

¹⁰ Se llevó a cabo a través de la Ley de 975 del 2005, llamada por el Congreso Ley de Justicia y Paz. Se trata de un mecanismo especial para facilitar la entrega de miembros de grupos armados ilegales mediante beneficios judiciales.

como una medida de no repetición: la terminación del conflicto armado y la desmilitarización del país. Para que se genere una reparación cierta, las mujeres expresan que debe erradicarse la violencia contra las mujeres, que se instale la paz como una condición ineludible para que no se reproduzcan nuevas víctimas y revictimizaciones a ellas y sus familias.

Para mí también la reparación tendría que ser una manera donde se le dé a uno la garantía de usted moverse para donde usted quiera. Que nadie te señale, que nadie te vigile, que nadie te haga la vida imposible. ¡Que usted sea libre! ¡Que usted vuelva a reír! ¡Que vuelva a abrir los brazos como las alas de un águila para volar! Que respire ese aire con alegría, que vuelva a tener esa paz interior que muchos no tenemos. Muchos de nosotros sentimos que dentro de nosotros hay algo así, hay algo apretado ahí, ¡un nudo que usted no puede soltar! Y ese nudo que usted no puede soltar es el nudo de que no hay ni paz, que no hay felicidad, que no hay tranquilidad, que no hay libertad. El día que vuelva a haber libertad para nosotros, yo creo que ese nudo suelta y vuela, ¿cierto? San Vicente de Chucurí, Santander, 1990 (pp. 373-375).

La reparación que las mujeres esperan

Es importante señalar que las mujeres entrelazan y entretejen las diversas violencias que experimentaron. Son hechos que sucedieron y cada una de las afectaciones se suma a los hechos y situaciones anteriores, las reedita y en muchas ocasiones las agrava. Hay que tener en cuenta que cada mujer de las 1000 sufrió entre cuatro y cinco hechos victimizantes (p. 26).

Las aspiraciones en materia de reparación para las mujeres que participaron en el proceso de la Comisión de la verdad, se expresan de forma diferente de acuerdo con sus particularidades regionales, contextuales, su propia experiencia de vida y los hechos que signaron su vida. Sus demandas se orientan, por un lado, a reparaciones individuales y hacia sus familias y, de otro lado, a reparaciones que cambien y ataquen las causas estructurales que permitieron que las violencias contra las mujeres tuvieran exacerbaciones y

agravamientos derivadas del conflicto armado. Son reparaciones que buscan transformar la realidad y las condiciones hacia las mujeres en el país.

Reparaciones individuales y hacia sus familias

Las reparaciones para las mujeres se hacen indispensables si se habla, en primer lugar, de un proceso de paz y, en segundo lugar, de la justicia transicional¹¹. Dado el papel que han tenido en las realidades del conflicto armado como lo demuestra el Informe de Comisión de la verdad de mujeres, las mujeres activan sus acciones en torno a sus seres queridos y sus comunidades fortaleciendo el tejido social y humanizándolo en medio de graves cargas emocionales, afectivas y físicas. Los hechos perpetrados contra ellas, que por lo general no reconocen ellas mismas por el modelo de sacrificio y resignación asignado culturalmente a las mujeres. Se hace difícil remover este modelo a fin de contar con un reconocimiento positivo de este.

En este sentido, el diseño de medidas específicas para la reparación individual que reconozca la dimensión del daño causado y, especialmente, que reconozca los impactos desproporcionados que estos causan en las mujeres, así como lograr evidenciar la diferencia o cómo las afectaciones son distintas, es un reto en toda política, sentencia o recomendación en cuanto a reparaciones se refiere.

Las reparaciones para las mujeres, además, deben guardar concordancia con los impactos que los hechos causaron integralmente en toda su vida, los impactos en su cuerpo y los efectos psicosociales derivados de la victimización, los cuales suelen ser diferentes a los de

¹¹ La justicia transicional hace referencia al conjunto de mecanismos transitorios para el tratamiento de graves violaciones de derechos humanos, son medidas judiciales y políticas que buscan reparar a las víctimas y establecer parámetros para el tratamiento del pasado y la prevención de nuevas violencias. Entre las medidas que se han empleado en los diversos países o experiencias están las comisiones de la verdad, planes de reparación para las víctimas, tribunales especiales y reformas institucionales y estructurales.

los varones y cobijan aspectos más allá de sí mismas, pues tienen que ver también con su familia y su entorno, que se perturba gravemente con las afectaciones hacia ellas.

Reparaciones estructurales

El otro elemento central sobre reparación está en establecer los patrones de victimización que cargan las mujeres con el fin de identificar los esfuerzos que hay que aplicar para la transformación de las condiciones que han permitido su reproducción. La política de reparaciones debe avanzar en generar los cambios estructurales que erradiquen las violencias contra las mujeres, promover la igualdad y la justicia entendida como las políticas de redistribución y las políticas de reconocimiento y que tengan un enfoque “comprehensivo, integrador, normativo y programático” (Fraser, N., 1997, p. 8)

Esta concepción de justicia se traduce en que atacar la violencia contra las mujeres requiere de políticas que avancen hacia la justicia social para las mujeres en términos de la reducción de la pobreza de las mujeres, las profundas inequidades y los obstáculos para su inclusión y participación política (redistribución); a su vez, se requieren políticas de reconocimiento centradas en el reconocimiento de identidades múltiples de las mujeres, las injusticias de género, étnico-racial y sexual.

En este sentido, los programas de reparación son una buena oportunidad para generar justicia transicional hacia las mujeres, en el sentido de establecer los cambios necesarios para la superación de la extrema pobreza a la que están sometidas. Por su parte, posibilitar la lucha contra la discriminación y subordinación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida requiere de intencionalidad y voluntad política.

Las reparaciones individuales en la Verdad de las mujeres Víctimas del Conflicto Armado

Como lo expresé inicialmente, para las mujeres los daños y pérdidas materiales y de vida que han sobrellevado después de los graves hechos que impactaron sus vidas y cuerpos¹² no pueden repararse. Esta afirmación es un sentir general por las mujeres testimoniantes, ellas señalan cómo su vida fue destruida, sus proyectos fueron seccionados, para ellas y para sus hijos, hijas y familiares. Las enfermedades crónicas que padecen producto del sufrimiento y el dolor emocional que no han logrado canalizar, son incalculables. Todos estos aspectos se constituyen en una sola expresión: los daños son irreparables.

Además, las mujeres expresan la imposibilidad de la reparación por el daño también como una forma de crítica al Estado y a la sociedad por la forma en que se banaliza la reparación. La mayoría de las veces se reduce a una reparación administrativa que finalmente se traduce en una indemnización económica simbólica sin orientarla a medidas que dignifiquen su ser. El siguiente testimonio nos ilustra la visión que tienen las mujeres sobre la reparación de lo irreparable.

Eso sí es muy difícil, yo creo que esos daños no se reparan nunca. Yo nunca he creído en eso de reparación. Yo diría que puede haber cosas que ayudan, que pueden ayudar y que finalmente hagan que las cosas sean menos difíciles. Que por lo menos se vea que se reconoce ese daño, al menos reconocerlo, porque repararlo yo creo que eso es imposible. Es una herida que siempre queda ahí, es una cicatriz [que] queda ahí. O sea, las heridas cierran, pero hay unas cicatrices

¹² En el contexto de la guerra, el cuerpo de las mujeres aparece como un territorio en el cual se expresa el poder de la cultura patriarcal. Las relaciones de poder marcan el cuerpo, lo obligan, lo dominan, y lo someten a la negación, lo fuerzan a trabajos y exigen signos. El cuerpo de las mujeres se convierte en fuerza útil cuando es productivo y sometido. El cuerpo de las mujeres representa un campo político definido, disciplinado para la producción, para la reproducción y el dominio de los armados.

que son fuertes y que nunca se van a borrar. Comuna 1, Medellín, Antioquia, 1996 (p. 383).

Para las mujeres, la irreparabilidad sobre los hechos y los impactos que vivieron se traduce en la no recuperación de sus seres queridos, en los dolores y la falta de cierres afectivos y emocionales frente a sus desaparecidos. En los hijos e hijas menores lo que significó crecer sin padre o madre a raíz de su asesinato o desaparición. En relación a su desarrollo personal y el sufrimiento por estas pérdidas, la desintegración de sus familias, de sus espacios vitales y de sus entornos culturales, la pérdida de los bienes que significaban su proceso de consolidación de un proyecto de vida. Los impactos psicosociales y las afectaciones en su salud, entre otros factores, son pérdidas o impactos que las mujeres manifiestan que no pueden ser reparados. No se puede devolver el tiempo y empezar como si no hubiese pasado nada, hay que mirar hacia adelante, pero se lleva esa carga sobre su historia de vida.

Medidas de compensación

Las medidas de compensación en la Verdad de las mujeres están determinadas por las condiciones en las cuales quedaron las mujeres después de los hechos victimizantes. Siendo encontradas en esta investigación entre 4 y 5 los hechos victimizantes que han incidido en su empobrecimiento e incrementado pérdidas materiales y altos impactos en sus condiciones de salud física y mental. Aunque las mujeres expresan la irreparabilidad sobre las consecuencias ya sufridas, sí consideran que deben ser reparadas y compensadas por los impactos producidos debido a la violación de sus derechos humanos.

Las mujeres aspiran a compensaciones en varios sentidos: indemnizaciones; con medidas que les permitan ingresos a través de proyectos productivos y medidas laborales; también reivindican las medidas educativas y de salud, así como formas de restablecer sus proyectos

de vida. Ellas propugnan por reintegrarse socialmente, porque el Estado las compense por los muchos años de oprobio que han debido afrontar.

Que nos den algo, que nos indemnicen, que nos den una compensación. De todas maneras, nadie le va a aliviar eso con plata, pero sí es una ayuda muy buena... porque pues igual una no tiene nada, una anda atrás de ganarse un jornal o tener un peso para comprarles las cosas a los niños. San Juan de la Florida, Argelia, Cauca, 2008 (p. 417).

En general, las medidas compensatorias que demandan las mujeres están centradas en indemnización, salud, apoyo laboral y educación.

Seis de cada diez mujeres (59%) mencionó compensaciones de tipo económico para hacer frente a las pérdidas sufridas y el empeoramiento de sus condiciones de vida y salud. Casi en igual medida, las demandas más fuertes fueron respecto a medidas educativas para ellas o sus hijos e hijas; 55%; de las mujeres hizo referencia a medidas de salud y atención psicosocial. Igualmente, el apoyo laboral para las mujeres tuvo una demanda del 53% (pp. 374-416).

Las testimoniantes expresan la necesidad de ser compensadas para superar su situación de extrema pobreza y pauperización dejada por las consecuencias del conflicto armado. Reconocen que no pueden ser compensadas a través del dinero, pero que sí requieren medidas que les brinden estabilidad económica, física y psicológica. Las indemnizaciones las reciben como un aporte para poder tramitar algunas cosas pendientes: como adquirir una vivienda, o arreglar el “rancho” donde viven, poner un negocio, pagar deudas que adquirieron para poder sobrevivir e incluso poder arreglar las tumbas de sus seres queridos.

Para las mujeres en general, retomar estas reparaciones se les convierte en un sentimiento ambivalente, pues creen que deben ser reparadas, pero a la vez resienten porque nada puede devolverles sus seres queridos y el tiempo de sufrimiento padecido. Como lo expresa el

mencionado informe, “La manera en como se representa esta indemnización por parte del Estado es muy importante para que no se pervierta este sentido reparador” (p. 417).

La tierra su acceso y devolución, una aspiración de mujeres rurales

La restitución de tierras representa un elemento importante en Colombia referido a la reparación, dado el alto nivel de desplazamiento forzado. Según datos oficiales, más de cuatro millones de personas desplazadas, de las cuales algo más del 50% son mujeres; además, más de cinco millones de hectáreas despojadas expresan la necesidad de políticas efectivas para la restitución de la tierra (Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas. Informe de desplazamiento..., 1985 a 2012). Aunque ya existen en la legislación colombiana las normas para hacer esta restitución a través de la Ley 1448 del 2011, para quienes fueron despojados, todavía no es una realidad.

En este sentido, es importante ilustrar los significantes que para las mujeres ha tenido el despojo y, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional (Auto 092 del 2008), los efectos desproporcionados que tiene en las mujeres estos hechos violentos que la obligan a desplazarse. Estos significantes se enuncian como el lugar seguro, pues les proporcionaba los medios para vivir aunque fuera en condiciones de pobreza, poder contar con el agua sin pagarla, el pancoger, sus animales de los cuales podían obtener algunos recursos, como gallinas, cerdos, vacas, cabras, etc. Son relatos reiterativos de las mujeres como impacto de lo que perdieron. Por esta razón, una de las medidas que buscan es que les entreguen tierra, ya sea que se las restituyan o les entreguen otra, reivindicando su vocación u oficio campesino. Los siguientes testimonios dan cuenta de ello:

Siempre lo que yo he soñado en mi vida es tener algo propio, ¡algo propio! Yo digo: “qué rico tener tierrita para uno sembrar comida, para uno sembrar algo”. Nosotros cuando estábamos en esa invasión, teníamos un pedacito. Allá sembrábamos cebollita, frijol, de todo

sembrábamos, tomate, y siempre hemos soñado con tener la tierrita. Santa Bárbara, Antioquia, 2001 (Tomo II, p. 422).

Pues para a mí me aliviaría que volvieran a reconocer la finca y todo lo que yo tenía en la casa para yo volver a trabajar. Seguir adelante con lo que yo tenía allá, todo, la finca, lo que yo tenía allá. Eso es lo que yo deseo porque trabajando en el campo es más suave para una. El Estado son los que tienen que reconocerle a uno algo de las cosas que ha perdido, tienen que ser ellos... así no sea la misma finca o que le den en otra parte una finquita por ahí. Cuánto no sería la alegría mía de que me reconocieran una finquita por allá, en otra parte. Tibú, Norte de Santander, 2003 (p. 423).

De otro lado, las mujeres tienen claro que su despojo ha tenido que ver con los megaproyectos que pasaron a ser sus tierras luego de los desplazamiento masivos. Estas empresas tienen responsabilidad pues todas son conocedoras de los antecedentes en las regiones donde están operando.

Siempre he estado en la lucha de la no repetición, pero uno no sabe de qué manera sería, la no repetición es de que no existan los megaproyectos, que deje de existir esa sed de poder de la oligarquía de tener y tener, y tenemos que despojar a la gente de sus bienes, perder los territorios, como saben acá los territorio son fructíferos. Montería, Córdoba (p. 421).

Es de destacar las medidas de reparación para territorios étnicos, para las mujeres donde la tierra está ligada a sus saberes ancestrales, la relación con la madre tierra, su cosmovisión referida a que la tierra es la fuente de vida material y espiritual, y su degradación se convierte en un atentado contra la humanidad.

Para las mujeres la tierra está ligada a medidas de restitución, de compensación, de apoyo técnico para poder trabajarla, de otorgamiento de compensaciones económicas para

desarrollarla, de garantías de no repetición, puesto que se requiere que se libere la tierra de actores armados que la colonizan, siembran miedo y nuevos despojos.

Medidas de rehabilitación

En relación con las medidas de rehabilitación, las mujeres testimoniantes de la Comisión de la Verdad son prolíficas en las propuestas, lo que se puede explicar y tiene relación con los graves impactos que relatan las mujeres sobre su salud física, emocional y psicosocial. Un 82% reporta haber sido víctima de alguna forma de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes (p. 27).

Son cuatro los aspectos centrales que refieren las mujeres en cuanto a sus necesidades de atención psicosocial:

- La urgencia de enfrentar el duelo, superar el trauma que ha dejado y ser escuchadas como una forma de recuperar su vida. Es el requerimiento de una atención especializada con enfoque de derechos humanos para acompañar el trauma y duelo que las mujeres no logran superar a pesar del tiempo transcurrido. Se expresa también como una medida que les ayude a recuperar su identidad. No quieren seguir siendo identificadas como víctimas, sino como mujeres que soportaron hechos en los cuales no quieren permanecer. Esta demanda de atención psicosocial viene acompañada con el interés de que tenga un carácter social y colectivo. Las mujeres para recuperar su vida tienen necesidad de reconstruir las relaciones fracturadas por el conflicto armado.
- La importancia de esta atención para sus hijos e hijas. Las mujeres lo refieren como una parte central en la reparación, puesto que saben que el que hayan sido niños o niñas cuando ocurrieron los hechos tiene efectos a corto, mediano y largo plazo, y abogan por una atención que sea preventiva de nuevos hechos violentos contra ellos, o de se conviertan en actores violentos por falta de la tramitación de duelos y traumas. Para las mujeres, las situaciones que suceden con sus hijos marcan su vida y su experiencia vital (pp. 414-415).

- La necesidad de acompañamiento a las mujeres víctimas. Muchas de las mujeres testimoniantes coinciden en que a través de su liderazgo se han visto afectadas por los impactos que tienen otras mujeres en sus vidas y de los cuales ellas son depositarias, no lo pueden tramitar de forma adecuada, cargandose muchas veces con las problemática de otras. Además, muchas mujeres por su trabajo comunitario viven bajo constante amenaza o presión. Lo anterior requiere medidas de rehabilitación para las organizaciones sociales de mujeres.
- Esta medida de rehabilitación de atención psicosocial debe ser incorporada a las políticas públicas. Esto quiere decir que deben ser programas integrados a los sistema de salud y deben tener enfoque de derechos humanos, con el fin de darle un tratamiento social general a los graves impactos que en las mujeres en particular y en la sociedad han dejado más de cincuenta años de conflicto armado.

La salud como medida de rehabilitación

Cerca del 54% de las mujeres requieren atención especializada en salud, como consecuencia de los impactos del conflicto armado (Tomo I, p. 516). Aunque la salud es un derecho fundamental y debe ser garantizado por las políticas sociales de los Estados, en los casos de violaciones de derechos humanos, dichas políticas se constituyen en medidas necesarias y dirigidas a las víctimas de estos hechos. Las mujeres atribuyen el empeoramiento de su salud a los hechos que vivieron.

Algunos de los impactos en su salud están caracterizados por las mujeres como dolores crónicos, insomnio, presión arterial, obesidad o extrema delgadez, problemas cardíacos, cáncer de mama o del aparato sexual reproductivo, envejecimiento prematuro y alto estrés postraumático. Estas enfermedades fueron señaladas en los testimonios por 4 de 10 mujeres (46,4%) (p. 202).

Es necesario, que como medida de reparación se implementen programas de salud que tengan en cuenta a las mujeres víctimas y las enfermedades que ellas narran como consecuencia de los hechos violentos. Esto tiene una directa conexión con la atención en salud mental y los enfoques psicosociales para afrontar la enfermedad y evitar muertes prematuras debido al deterioro de las condiciones de vida.

El informe recomienda tres factores importantes a tener en cuenta en los planes de salud para las mujeres víctimas:

1) la consideración de la atención psicosocial como parte de la atención en problemas de salud y una perspectiva interdisciplinar 2) la atención en salud que permita restaurar también las condiciones de vida y disminuir las fuentes de estrés de las víctimas; y 3) la atención de los diferentes problemas de salud de forma conjunta, superando las barreras de accesibilidad geográfica y económica dada la responsabilidad del Estado en la violencia sufrida y la ausencia de medios que muchas víctimas padecen (p. 433).

Reparaciones simbólicas

Actos de memoria, reconocimiento de las víctimas, renombrar, recordar, son voces comunes en las mujeres testimoniantes que tiene que ver con la dignificación de las víctimas, así como de sus seres queridos que hoy no las acompañan.

Las mujeres se mueven en dos dimensiones referidas a las reparaciones simbólicas: 1) los actos de memoria para sus víctimas, y 2) el reconocimiento político que el Estado debe hacer de la violación que se produjo (es decir, un reconocimiento político y social).

En la memoria está implícita un recuerdo de sus seres queridos lo que fueron en vida, su historia, para que se conozca su inocencia y dignidad en los acontecimientos que sucedieron. Las víctimas requieren esta memoria para remarcar la injusticia que se dio con los hechos victimizantes y la gravedad de los impactos que estos les que causaron.

Y las medidas simbólicas, que pienso que no se han hecho. Con la Unión Patriótica se han hecho algunas cosas, pero muy... muy desde los movimientos de izquierda y muy desde quienes militaron ahí. Por ejemplo, mi papá y mi tío Jair decidieron escribir un libro sobre Gildardo Castaño, el dirigente político comunista de la Unión Patriótica más importante que tuvo Risaralda en ese momento, y que era pues muy reconocido por toda la clase dirigente de este país y en esta región. Y pienso, que con Gildardo por ejemplo esas medidas simbólicas las hicieron ellos mismos, cuando mi mamá y mi tío decidieron escribir ese libro, pero nunca, nunca que el Estado haya reconocido que eso fue responsabilidad de ellos, y pienso que eso es necesario. Belalcázar, Cauca, 2009 (p. 403).

De otro lado, para las víctimas es central el reconocimiento social y político de lo que pasó; esto puede lograrse a través de exposiciones, esculturas, así como representaciones artísticas, recordar a las víctimas es una forma de dignificar socialmente. También las mujeres aprecian que se reconozcan las diversas y ricas formas de afrontamiento, de resistencia y de retomar sus vidas.

Las reparaciones frente a la violencia sexual

La aspiración en materia de reparaciones para las mujeres víctimas de violencia sexual se asemeja a las demandas que en otro tipo de violencias sufridas requieren para sentirse reparadas. Sin embargo, hay algunos énfasis que las mujeres expresan que son importantes recalcar.

Por un lado, las mujeres expresan la necesidad de un mayor apoyo. Dado el contexto en que generalmente deben vivir por los impactos como por las formas de afrontarlo. Lo corriente es que las mujeres oculten los hechos y los afronten individualmente, de forma tal que el daño es permanente y agravado por el miedo a la estigmatización, la vergüenza y el

ostracismo. En este sentido, generar condiciones para que las mujeres puedan relatar su experiencia es de alto valor para ellas.

A mí lo legal, me afectó mucho lo legal... para mí sería muy satisfactorio, porque hubieron personas que dudaron de mi inocencia, poder mostrar la verdad es esta y vos como fiscal no tenés ningún derecho en coger a una persona y volverla nada, porque yo podría decirle usted destruyó mi vida, venía destruida y usted acabó con lo poquito que había. Porque es que si olvidamos todo eso que pasó, si ignoramos entonces las otras mujeres que están violando en estos momentos, ¿qué va a pasar con ellas? quedan igual en silencio. Todo lo que nos ha pasado a todas nosotras atrás lo tenemos ahí presente, las otras mujeres lo ven y van a decir por qué decido hablar... si se puede hacer algo por las mujeres por las que le pasó y por las que Dios quiera que no les pase. Medellín, Antioquia, 2006 (p. 44).

Otro de los aspectos importantes para las mujeres es la investigación. Ellas lo asumen como una forma de justicia, que se sepa que estos hechos tuvieron lugar y que se reconozca socialmente el daño causado a las mujeres y sus entornos. El reconocimiento y saber que pasó se constituyen en actos de prevención y de justicia para ellas, porque sienten que las dignifica. Una verdad contada desde la comprensión y la compasión genera para las mujeres víctimas de este tipo de violencia, una forma de resarcimiento, las coloca en un lugar de protagonistas de una experiencia que no debe repetirse para ninguna mujer. Ellas quieren hacer el tránsito de una identidad de víctimas a ser sujeto de una experiencia y de tener derechos como forma de reparación.

En un aspecto más hacia la no repetición, consideran que nunca más ellas deberán sentir temor o vivir bajo la amenaza de la violencia sexual, sea en el espacio público o privado. Según ellas, se debe crear políticas institucionales, que prevengan la violencia, que la investiguen y sancionen, que a su vez sean protectoras y que finalmente fomenten una cultura

de respeto, de no violencia contra las mujeres y las niñas es algo que contribuirá a que disfruten los derechos humanos negados o cercenados a lo largo de la historia de la humanidad.

Como un asunto de profunda importancia, las mujeres reclaman la atención y acompañamiento psicosocial y emocional, conocen los impactos sufridos —muchas veces silenciados—, saben cómo se truncó su vida y los campos emocionales y afectivos, llevan la carga de hechos que no pueden denunciarse públicamente y saben que en estos asuntos requieren ser acogidas y creídas a través de apoyos psicosociales con enfoque de derechos de las mujeres. Las mujeres quieren que estos apoyos los proporcionen mujeres que puedan generar redes de confianza.

La verdad como una forma de reparación

En la *Verdad de las mujeres...*, la mitad de las mujeres entrevistadas hace énfasis en la verdad como forma de reparación (p. 395). Se constata cómo para las mujeres ésta es parte constitutiva de su reparación; ellas requieren no solo conocer los porqué de los hechos, sino muchas veces conocer los hechos mismos, especialmente en relación con los asesinatos y desapariciones.

La verdad en la experiencia de este proceso no solo se basa en los hechos o el contexto en que estos se dieron, sino en “la coincidencia entre los hechos experimentados y lo que se dice de esta experiencia de sufrir la violencia y sobrevivir a ella” (*Verdad de las mujeres*, versión resumida, tomo I, p. 17).

Hay varios sentidos de la verdad como derecho y como deber. Las mujeres expresan que la verdad sería un aporte contra la impunidad, especialmente la impunidad de los hechos e impactos del conflicto armado en las mujeres. “Pienso que la historia hay que conocerla para que no se repita, de pronto este aporte que estoy dando es para que las generaciones que

vengan tengan planteamientos mejores, no vayan a sufrir todo lo que uno sufrió”. Popayán, Cauca (p. 17).

Sobre la verdad de las mujeres contada a partir de esta recopilación de testimonios, ellas expresan que la verdad comienza por el reconocimiento de las graves violencias ejercidas y practicadas en el conflicto armado colombiano. También tienen un sentido de la verdad como un elemento que abona a la reconstrucción del tejido social ofrecida no solo para las víctimas sino para la sociedad en su conjunto.

La Comisión quiso hablar de la verdad partiendo de que no existe una sola verdad, y de los hechos violentos representan diversas verdades. El informe las ilustra a partir de los mecanismos de terror impuestos contra las mujeres, el dolor, las pérdidas, la violencia física, psicológica, sexual, los impactos en su salud, vida afectiva y sexual, las rupturas en su proyecto de vida, entre muchas otras.

La verdad está referida a recordar esos hechos y transformar esas experiencia desde la subjetividad. Cómo las mujeres lo vivencian, lo narran y lo inscriben en su biografía, es una verdad que reivindica y recupera la subjetividad porque es allí donde el dolor y los duelos tienen su subterfugio y permanencia, Contada así ausculta no solo los hechos, sino los impactos a través de la vida, pero también la capacidad afrontamiento para continuar con la existencia. Tal vez no se queda en el porqué me pasó, sino en el para qué y en ese para que demuestra las grandes luchas diarias de las mujeres por resistir, sobrevivir, rehacer su vida, la de sus familias y comunidades.

La verdad que reivindican las mujeres las hace ser “dueñas de su propia memoria” (p. 33), evitando la instrumentalización. Que conceda significados y sentidos propios a la experiencia que se sustrae de interpretaciones externas del patriarcado en el caso de las mujeres.

“Esta verdad debe hacer un puente entre la experiencia íntima y el daño colectivo para las mujeres en el colectivo social de mujeres que debe ser reconocido en una nueva memoria compartida” (p. 33).

“En el caso de esta verdad de las mujeres también abre la pugna por la significación y apropiación del discurso histórico de la memoria colectiva” (p. 34). Al sacarla a flote, pone en evidencia que una parte de la memoria no se ha incorporado a la memoria común, la memoria de las mujeres, suplantada por el sujeto masculino como totalidad.

La verdad puesta así y convertirla en memoria colectiva, con nuevas miradas no previstas, es un proceso sanador que contribuye a la transformación de la sociedad y es la base para que no se repitan los hechos violentos.

También es reparador a escala comunitaria porque permite hacer visible, pedazos de la realidad que habían sido borrados. El que se escuche la experiencia de las víctimas mitiga la violencia simbólica que supone la imposición de un discurso por parte de quienes ejercen el poder (p. 34).

En conclusión, se puede decir que para las mujeres, la verdad legal —aunque muchas veces puede constituirse en un elemento revictimizante cuando es contada con la justificación de los perpetradores— ésta se hace necesaria para avanzar en los procesos de justicia y reparación. Esta reparación no solo deviene de las sentencias proferidas en los casos judiciales, ya que una verdad contada en procesos de comisiones de la verdad se constituye en un acto de sanación cuando puede ser tramitada con el respeto y la empatía que merecen sus narrativas.

La justicia

Alrededor del 47% de las mujeres testimoniantes expresan la justicia como una forma de sentirse reparadas (p. 374). Consideran las mujeres que quienes les infringieron tanto dolor y sufrimiento deben de ser castigados por los hechos cometidos.

“Lo único que quiero yo es justicia, que se haga justicia sobre ese caso, que no se quede en la impunidad”, Vereda Belén, Cauca, 2006 (*La verdad de las mujeres*, Tomo II, p. 405).

Para las mujeres, la impunidad y las injusticias permanentes sobre las violencias contra las mujeres tienen que ver con la falta de historia sobre los graves delitos que se comenten en su contra, la impunidad permanente y las justificaciones que durante siglos la normatividad y los códigos aceptaron como parte de los pactos jurídicos establecidos y con enfoques patriarcales¹³. Por ello es comprensible lo extraño que para las mujeres es lo legal y la justicia que de este se deriva de él.

De acuerdo con los testimonios, la investigación y la sanción los perpetradores es la forma como ellas sentirían que hubo justicia sobre los hechos e impactos que dejaron en su vida y la de sus familias, y es la única manera que sentirían resarcido el daño causado. “Lo único que pido es justicia. La vida de mi hija no valía la plata, y nunca va a valer. Yo sé que la plata se gasta pero yo pido justicia, que haya justicia”. Peruanza de Garzón, Huila, 2006 (p. 404).

Hay también un sentido retributivo en las demandas de justicia: lo expresan como una forma de que los infractores paguen por lo que hicieron. Ese pagar exigido en penas y en el encarcelamiento por las conductas perpetradas. “Yo siempre he dicho que lo que uno hace lo tiene que pagar. Estaba denunciando eso para que vieran que las cosas no se queden impunes, porque ella ya murió pero queda la familia con el dolor y con el pensar que no hay justicia”, Frontino, Antioquia (p. 406).

Las mujeres expresan otros elementos frente a la justicia que apuntan hacia las justicias estructurales referidas a las violencias contra las mujeres, de las cuales ellas conocen que son la base para las impunidades sobre los casos desarrollados en el contexto del conflicto armado. Si las violencias contra las mujeres no son tratadas con la *debida diligencia*, como lo dicta la Convención de Belém do Pará, aunque se supere el conflicto armado en el país, estas

¹³ Según Alda Facio, aunque hay un derecho moderno que reconoce los derechos de las mujeres, persisten trasfondos que operan y limitan esos mismos derechos, despojadas de la libertad, de la integridad física y profundizando la función reproductora de las mujeres.

seguirán siendo expresión de las graves injusticias con más de la mitad de la población colombiana.

Además, en los testimonios es clara la responsabilidad del Estado frente a la justicia, que se traduce en el deber de garantizar de manera adecuada y efectiva la investigación por los hechos acaecidos y la sanción de los responsables de esos hechos. “La responsabilidad inicial, indiscutiblemente es estatal. Que el Estado utilice todas las herramientas y todas sus instituciones para proteger, garantizar, el ejercicio de los derechos, identificar responsables, obtener buenos resultados de las investigaciones”, Popayán, Cauca (p. 406).

Las mujeres opinan que no solo deben someterse a la justicia los autores materiales, sino quienes estuvieron detrás de los hechos, haciendo clara referencia a los jefes de las organizaciones armadas legales e ilegales y de las personas que, aunque no hagan parte de estas organizaciones, han sido determinantes en la conformación y robustecimiento como son políticos y los poderes económicos.

Que se hicieran investigaciones precisas, no tanto para radicar los autores materiales, sino que hubiera un castigo ejemplarizante para los autores intelectuales. El problema es quién ordena y estas personas que ordenan son generalmente las que están en grandes instituciones, en grandes puestos y siempre van a quedar, porque sicarios nunca van a faltar. Corregimiento Carmelo, Cajibío, Cauca (p. 408).

En general, las mujeres no creen que la justicia se pueda llevar a cabo en un país con tantos años de conflicto armado, sobre todo con el antecedente de la Ley 975 de Justicia y Paz¹⁴ sobre la negociación con los grupos paramilitares. Sin embargo, también afirman que parte de la no repetición está vinculada con la justicia y debe avanzarse en este campo para alcanzar la paz.

¹⁴ Ley de 975 del 2005. Se trata de un mecanismo especial para facilitar la entrega de miembros de grupos armados ilegales mediante beneficios judiciales.

Reparaciones estructurales para las mujeres

Parte de las aspiraciones de las mujeres testimoniadas de la Verdad de las mujeres tiene que ver con los cambios que les posibilitará a las mujeres una mejor vida o un “buen vivir”, como lo manifiestan algunas de ellas. Estas medidas son las condiciones básicas para vivir en un país donde el miedo, la amenaza, el hostigamiento o, los hechos violentos que se ensañan contra ellas y que circundan sus vidas puedan superarse y pasarse a otro estado de cosas.

Las medidas para el cambio están ligadas a las garantías de no repetición, toda vez que se sitúan como una causa del conflicto armado las graves desigualdades estructurales que tiene el país, las cuales generan los ejércitos para alimentar las organizaciones armadas de todo tipo. Estas desigualdades y las consecuencias del conflicto armado recaen con mayor impacto en ellas generando mayor feminización de la pobreza¹⁵.

En este sentido, las testimoniadas señalan que las reformas estructurales son centrales si se trata de medidas de no repetición y de cara a una eventual negociación en el país. Están categorizadas en la investigación como “el segundo factor incluye las *medidas legales y de reformas en el Estado* y es referido por el 51,6 % (482) de las mujeres” (p. 376).

Estas medidas son las condiciones políticas para la reparación que se basa en un volver a empezar y ello requiere generar políticas para los déficits económicos, sociales y culturales, que no son más que el respeto y garantía los derechos humanos de las mujeres, y así poder lograr que la reparación transforme sus condiciones de vida.

Es así como las mujeres ven en las medidas de reparación una oportunidad para el cambio referido en la desigualdad económica, social y cultural, y como una oportunidad para la

¹⁵ Es un concepto acuñado por estudios de género y feministas que explica los mayores impactos de los indicadores de pobreza en las mujeres. Dadas las condiciones históricas de desigualdad y discriminación, la pobreza para las mujeres trae sobrecargas físicas y emocionales por las responsabilidades asignadas socialmente, como el cuidado, la crianza de sus hijos en general las labores domésticas entre otras.

justicia social con las mujeres. Aunque las obligaciones del Estado en cuanto a garantía de los derechos humanos y los derechos y en particular con los derechos económicos, sociales y culturales no son medidas de reparación, sí generan las condiciones para que la reparación sea efectiva y eficaz.

Las medidas estructurales son variadas y tienen que ver con las faltantes en condiciones de vida digna para las mujeres y sus familias. A continuación se presentarán algunas demandas que las mujeres enuncian:

Derecho a la vivienda, educación, salud y seguridad social

En las entrevistas referidas de los derechos sociales, las mujeres reconocen que sin políticas públicas que aseguren una vida digna, las medidas de reparación solo serán un paliativo frente a el empobrecimiento que los hechos victimizantes les han generado.

Creo que más que me den una plata (...) el gobierno, debería garantizarles a las mujeres que son víctimas de desplazamiento y víctimas de estas violencias, un acceso a la educación, un acceso a la salud, pero una atención diferenciada, un acceso a vivienda. Corregimiento de Plan de Armas, Landázuri, Santander (p. 428).

Para las mujeres la educación, el trabajo o acceso laboral y la vivienda son los elementos esenciales que complementan las reparaciones.

La educación se constituye en el vehículo para insertarse en los procesos laborales. Para las mujeres, la educación se considera la forma de salir de la pobreza y también cumple un papel preventivo en relación con sus hijos e hijas, que quedan expuestos al reclutamiento, la drogadicción y la prostitución. Además, se reivindica como medida de reparación porque hace parte de los impactos que sufrieron al retrasar los procesos educativos de sus hijos e hijas y al truncar las posibilidades para lograr profesionalizarse a mediano plazo.

Un 55,1% (p. 424) de las mujeres reclaman la urgencia de políticas de educación especiales para su estabilización económica y personal, teniendo en cuenta que su victimización les quitó a ellas y sus hijos las posibilidades en su desarrollo personal y de vida. Se sitúa la educación como una forma habilitante para todos los aspectos de la vida. A este respecto, las mujeres reconocen que la falta de educación las pone, en general, en la escala más baja en la producción, en el sector informal y en las condiciones más graves, en la mendicidad o forzadas (ellas o sus hijas) a ejercer la prostitución. Además, les impide para acceder a las ofertas institucionales a las que posiblemente pudieran alcanzar por falta de información de condiciones para la exigibilidad de sus derechos.

Respecto al acceso al empleo, el 52,4 de las mujeres entrevistadas demandan apoyo laboral (p. 374). Uno de los aspectos que llama la atención en los anhelos de ser reparadas es, por un lado, la irreparabilidad sobre lo que ya se expuso al inicio; el otro elemento es la perspectiva de las mujeres acerca de que lo que las estabiliza no es la indemnización, sino tener la posibilidad de acceso al empleo en condiciones dignas, Esto se traduce en trabajos formales que les posibilite ingresos para vivir dignamente y afrontar los graves impactos que tuvieron con las pérdidas materiales y en su cuerpo y vida.

A las mujeres víctimas, les ha tocado mantenerse en permanente búsqueda de su sustento diario. Este derecho fundamental al trabajo se constituye en una forma de reparación de manera más estructural. Es una medida de restitución, puesto que ellas sienten que la destrucción de su vida debe ser compensada con esta medida, superando la visión de mantenerse a través de subsidios.

“Que mis hijas todas las que ya se graduaron estuvieran un buen empleo, que yo estuviera un empleo también, que fuera un pago digno y tener un proyecto de vida definido”. Turbo, Antioquia (p. 435).

La vivienda se convierte en una aspiración central que como medida de reparación. Fue demandada por mujeres en situación de desplazamiento por un “75% y las mujeres que perdieron sus bienes en un 24%” (p. 438). Contar con una casa les proporciona seguridad a la mujeres y también les genera mejores condiciones de vida, puesto que muchas de ellas han tenido que vivir en ranchos, hacinadas y sin las mínimas condiciones de salubridad. Además, la casa les proporciona un ambiente positivo para la recuperación de su proyecto de vida.

Derecho a una vida libre de violencias contra las mujer

La prevención de las violencias contra las mujeres es una de las reivindicaciones que las mujeres demandan en una política de reparación que transforme las condiciones que posibilitan que ellas sean blanco de violencias en su vida privada y en el espacio público; incluyendo las violencias derivadas del conflicto armado. Se espera que el Estado asuma que, lo que les sucedió y les sucede a las mujeres en el conflicto armado y en tiempos de paz, cuando se llegue a un acuerdo de paz y se erradique la alta impunidad tanto jurídica como social y cultural que tiene el país.

Erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, es vista por las testimoniantes como un elemento central para revalorizar a las mujeres víctimas de estas violaciones a sus derechos humanos. Las mujeres saben que la clave está en la defensa de este derecho por parte de ellas mismas y que las posicione como agentes de cambio y así atacar las bases de su subordinación. Sin embargo es necesario que el Estado adopte medidas claras dirigidas a eliminar la violencia en la vida de las mujeres, que no solo se basen en legislaciones sino en voluntad política y prioridad en las políticas públicas del Estado.

Si nosotras no nos valoramos, ellos [los hombres] no nos van a valorar a nosotras. Que nosotras seamos dignas de nosotras mismas, no digna de ese hombre, no dignas porque ese hombre dice, si no de que nosotras nos sintamos dignas; y eso lo que yo le dije a otras, que yo quisiera que mi Dios, como con una varita, que a todas las mujeres les tocara el corazón y ellas se dijeran “sí

vale la pena” (...) Algún día vamos a coger conciencia las mujeres y vamos a decir “mujeres, es hora de que ya nos organicemos y pensemos en nosotras mismas, no pensemos en los hombres, pensemos en nosotras mismas por nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestros hijos”. Montería, Córdoba (p. 389).

Las mujeres han referido diferentes violencias en el marco del conflicto armado. Han tenido violencia física, psicológica y sexual. Un 54,4 % de las mujeres refirieron violencia psicológica, que se expresa en un profundo sufrimiento traducido en “pérdidas, renunciadas, abandonos, confusión, inseguridad, miedo, humillaciones, violación, torturas soledad” (p. 44). Este sufrimiento se evidencia en tristeza y en muchas ocasiones genera una profunda depresión y hasta la muerte.

“Un 15% de las mujeres testimoniantes de la C.V. relata violencia física traducida en patadas, golpes, insultos, heridas producidas por actores armados, incluido el ejército” (p. 45). Un 13,2 % de mujeres refieren violencia sexual.

Estas violencias que las mujeres viven también en tiempos de paz y por ello las medidas de reparación deben focalizarse en la erradicación y el tratamiento de este problema estructural que cargan las mujeres en el país. Mientras no se eliminan estas cifras que reflejan las violencias contra las mujeres no puede darse por concluida la reparación.

Los dispositivos políticos para garantizar la eliminación de las violencias contra las mujeres parten de incentivar diferentes aspectos, como son el tener las condiciones para romper el silencio que normalmente ha acompañado los hechos violentos tanto en el conflicto armado como en la vida de las mujeres; resignificar el papel de las mujeres en la sociedad y su papel en la defensa de la vida en medio del desarrollo de las confrontaciones armadas; incentivar “el mutuo apoyo entre las mujeres, de experiencias compartidas de trabajo de grupo de mujeres que se vuelve esencial para una reparación efectiva” (Tomo II, p. 390).

“Que se dignifique a la mujer, con todo lo que las mujeres hemos aportado para el país. Que hemos aportado para el Estado. Esa es una forma de reivindicar a las mujeres, ¿cómo? Haciendo efectivos sus derechos”. Distrito Aguablanca, Cali, Valle del Cauca (p. 391).

Las mujeres testimoniantes también agencian la necesidad de crear condiciones para la denuncia que es una forma de afrontar la impunidad y el garantizar las condiciones para que no se revictimicen en la trazabilidad de la atención, la investigación y la reparación, asunto del que además sienten que tienen victimizaciones secundarias.

Denunciar. Seguir con la incidencia y el empoderamiento, yo pienso que... sigamos sumando a todos los procesos de mujeres contra la violación por el solo hecho de ser mujeres. Que haya penas ejemplares. Que nosotras mismas no permitamos que nadie abuse de nosotras. Saravena, Arauca (p. 391).

Otro elemento que aportan las mujeres es el derecho a la verdad como una garantía de una vida libre de violencias. Ellas tienen la esperanza de que el conocimiento colectivo de estas violencias vividas genere las medidas para prevenirlas. La verdad reconocida como aporte que hacen las mujeres puede generar las condiciones para que la violencia no se continúe perpetrando de forma permanente.

Medidas de no repetición de las violencias y la guerra

Las medidas de no repetición están expresadas en varios sentidos por parte de las mujeres testimoniantes. Uno tiene que ver con la erradicación de las violencias contra las mujeres, la otra está centrada en la terminación del conflicto armado, la memoria de lo que pasó en el país y la desmilitarización de la vida y la sociedad.

Para estas mil mujeres testimoniantes, una condición para la no repetición es la negociación del conflicto armado. Ellas expresan la necesidad de dar por terminada esta guerra de más de cincuenta años que ha permitido el horror que a ellas les ha tocado vivir.

Hacen llamados a que todos los actores armados, estatales, guerrilleros, paramilitares, y las ahora bacrim, cesen las acciones armadas a través de una negociación (hay que aclarar que cuando las mujeres dieron su testimonio no había proceso de negociación) y el desmantelamiento de empresas criminales que surgen en medio del conflicto armado. Para las mujeres, un ambiente sin miedo a los actos armados es una forma de no repetición.

Hay que se acabara todo eso, que uno pudiera vivir en paz y tranquilo, ¿no le parece? Muy bueno que no hubieran más grupos armados, que la gente pudiera desplazarse de un lugar a otro y que no tenga ningún peligro. Corregimiento de San Antonio de Prado, Antioquia (p. 454).

La desmilitarización es otra de las aspiraciones de las mujeres. Un 52,7% de las mujeres la piden como una medida de no repetición (p. 516). Para las mujeres, los ambientes armados donde es preponderante el control militar por parte de grupos, organizaciones o las fuerzas armadas estatales son escenarios negativos y de alto riesgo de acciones violentas contra ellas y sus familiares. Ellas consideran que la alta visibilización de armas genera nuevas formas de violencia y educa sus hijos e hijas con predisposición a su porte y uso. Abogan porque exista una política de desarme, de desmantelamiento de estructuras armadas y de unas fuerzas armadas respetuosas de los derechos humanos y sin la superioridad actual. La paz tiene que ver con desarrollo, la garantía de derechos ciertos, la erradicación de todas las violencias, especialmente contra las mujeres, la alta inclusión social y ambientes democráticos, ya que así las armas pierden poder.

“Yo digo que el gobierno cambiara un poquito la expectativa, de pronto desmantelar tantos grupos al margen de la ley que hay, desarmarlos, ponerlos hacer cosas diferentes a pensar solamente

en la violencia, en la guerra”. Bojayá, Chocó (p. 452).

Un proceso de paz de corto aliento, es imposible pensarlo. Yo pienso que se necesita un proceso de largo aliento con el concurso y con la participación de todos los sectores de la sociedad, del Estado, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos y que realmente, pues haya una posibilidad de hacerlo, y con garantías además, porque ha habido ya unos momentos donde supuestamente se ha intentado pero no ha habido garantías y donde los actores no han tenido tampoco las voluntades para que eso sea así. Putumayo, 2000 (p. 425).

La verdad y la memoria también se constituyen en elementos centrales para la no repetición. Las mujeres tienen la convicción de que la verdad, aparte de ser un hecho liberador de sus sufrimientos también social y colectivamente es fuente de conciencia colectiva sobre lo que debemos evitar. La memoria, por su parte, es una forma de reparación simbólica que juega un papel en la medida en que esa memoria se vuelve positiva como reconocimiento y dignificación de las mujeres víctimas, además de ser preventiva hacia las generaciones futuras, tal como lo expresa el siguiente testimonio:

Contarle a los niños, a las nuevas generaciones. Para mí el trabajo fundamental está en los niños y en los jóvenes. Que nosotros tuviéramos una cátedra donde le contemos a todos estos niños y estas niñas toda la barbarie que hemos vivido durante décadas, para que podamos... formarlos en los valores de la tolerancia, en los valores del respeto a la vida, en el valor de la solidaridad, en el valor del amor a la patria. Pero no un amor a la patria poniéndome la mano aquí en el pecho y cantando el himno nacional y después olvidándome ¡no! Donde nosotros a los niños les enseñemos de verdad verdad, toda la historia desde esta barbarie que hemos vivido, para que ellos tengan conocimiento de que esta patria se ha formado a través de mucha sangre, ¿cierto? Entonces, para mí, ese es el primer elemento, los niños. Pereira, Risaralda (p. 449).

Protección para las mujeres

La seguridad para las mujeres está centrada en tener espacios tranquilos para su vida y la de su entorno. El 43,2% de las mujeres hablaron de necesidad de protección para las víctimas debido a la inseguridad a la que han estado sometidas (p. 450). Para las mujeres, es parte de dejar atrás esos años dolorosos y un continuar su vida sin la amenaza y la hostilidad permanente. Esa seguridad se expresa como un sistema de protección que no permita que les suceda nuevos hechos violentos.

Todos aquellos que no están de pronto en el proceso de Justicia y Paz, porque sabemos que hay muchos que están libres. Y el peligro que tenemos, pues en caso de nosotras las víctimas que de pronto estamos reclamando estos derechos a la verdad, la justicia y a la no repetición, de una u otra manera, estos que están libres podrían tomar represalias contra nosotros y contra las diferentes organizaciones. Yo hago parte del cabildo y sé del peligro que está corriendo mi comunidad, por el simple hecho de estar de pronto exigiendo estos derechos. Santander de Quilichao, Cauca (p. 452).

El Estado es el responsable

Para las testimoniantes, la relación entre verdad, justicia y reparación debe ser garantizada por el Estado. El 45,2% señalan la necesidad de cambios en el Estado (p. 455). Se requiere un Estado cercano a las comunidades y a sus problemáticas económicas, sociales y culturales no debe centrar su actuación militarizando sus comunidades.

Yo pienso que un país que viva los derechos, los derechos constitucionales, es un país ideal. Un país donde tenga salud, un país donde no tenga que llegar a las tres de la mañana, llorar y rogar y esperar y perder la cita. Un país donde yo tenga educación, que no tenga que rogar y de pronto hasta dejar de comer para poder meter a mis hijos a la universidad. Fusagasugá, Cundinamarca (p. 444).

Las mujeres responsabilizan al Estado de lo que les sucedió, puesto que los hechos fueron por acción u omisión del Estado. El Estado tuvo que haber tomado las medidas necesarias para la terminación del conflicto armado y evitar la espiral de guerra y violencia que les tocado vivir en el país.

“Que el Estado sea el que se encargue de solucionarnos toda esta problemática que tenemos, porque ellos nos sacaron, ellos nos tienen que dar la solución acá. Que respeten las vidas”. Castilla, Meta (p. 445).

“En un territorio, en un país como este, para que todo lo que me ha sucedido a mí no le pase es que haya un Estado competente, legal, que sí sea democrático porque aquí no hay democracia”. Comuna 13, Medellín, Antioquia (p. 445).

Como se puede deducir de los testimonios citados anteriormente, las mujeres tienen amplias expectativas respecto de las reparaciones a que tienen derecho, y contrario a lo que reza el estereotipo, según el cual las víctimas en su mayoría no conocen sus derechos, se evidencia en las mujeres un nivel de empoderamiento importante y un conocimiento, o cuando menos intuición de lo que deben recibir.

Este ejercicio permite demostrar que si bien la mayor parte de las pretensiones de las mujeres tienen que ver con lo económico, estas a su vez están atravesadas por una exigencia constante de verdad y justicia.

Las voces de las mujeres nos muestran que la no repetición y una vida digna son los pilares principales de las reparaciones desde la visión de las mujeres. ¿Se parece esto a los principios de reparación contruidos desde la academia y la jurisprudencia? La respuesta es no. Aún existe un amplio abismo entre las necesidades, sentires y querer de las mujeres y las realidades jurídicas, que al final no responden con idoneidad al propósito con el que fueron creadas.

Conclusiones

Puede constarse que aún los derechos de las mujeres en general y las violencias contra las mujeres en particular, incluyendo los conflictos armados, no tienen una jurisprudencia robusta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto necesariamente refleja que las reparaciones para las mujeres puedan diferenciarse de acuerdo con los impactos explícitos en las peticiones, o implícitos por el contexto en que se dieron los hechos, dada la graves afectaciones que por lo general sufren las mujeres por hechos violentos contra ellas o sus familias.

Si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha avanzado en cuanto al reconocimiento de afectaciones diferenciales a las mujeres en el marco de conflictos armados, sus decisiones en materia de reparaciones siguen teniendo falencias para interpretar las realidades de las mujeres y sus necesidades.

El Sistema Interamericano no escapa a la eterna distancia entre el derecho y las reivindicaciones de las mujeres. Sin embargo, considero que precisamente el mismo derecho puede ser una herramienta crucial para resarcir afectaciones y reducir la brecha de discriminación y violencia vividas por las mujeres. Si el Sistema Interamericano abre sus interpretaciones del art. 86 de la Convención Interamericana a los testimonios de las mujeres que acuden a su estrado, podemos marcar un hito en la protección de derechos fundamentales.

Las reparaciones, más que reglas, deben ser adaptables a cada caso en concreto, y de ninguna manera pueden tener como pilar central el resarcimiento económico. Es importante que la Corte consulte con cada mujer víctima la forma en que consideran que deben ser resarcidas, y la manera en que el Estado puede contribuir a reconstruir su proyecto vital. Esto obviamente respetando las normas existentes. Considero que la Corte puede leer la norma

desde los pedidos de las mujeres y aplicarla de la manera más similar a lo que ellas requieren para ser resarcidas. Este paso, que hoy no se está ejecutando en el marco de los procesos ante la jurisdicción interamericana, sería un avance fundamental que permitiría a las mujeres sentirse escuchadas y reconocer sus peticiones en las sentencias.

Hay coincidencias entre las normas internas de Colombia y algunos de los pedidos frecuentes de las mujeres víctimas: políticas sociales, auxilios de estudio, vivienda, etc. Es necesario potencializar esto y pedir de la Corte IDH que dé órdenes de reparación menos generales, y que analice los ordenamientos internos para activar eventuales mecanismos que sean útiles. Esto evita que los Estados dilaten o saquen excusas para el debido cumplimiento de las reparaciones ordenadas. Incluso si la Corte encuentra que las normas de reparación existentes en un país son débiles o no cumplen con los estándares mínimos de protección en derechos humanos, puede sugerir cambios en virtud del art. 2.º de la Convención Americana.

Las reparaciones genéricas en dinero llevan a que el Estado dilate la garantía de derechos de las mujeres y se limite en algunos casos a la entrega de estas sumas. Las órdenes más específicas, como ya se ha venido haciendo en algunos de los casos más recientes ante el Sistema, como el de Manuel Cepeda vs. Colombia o el caso del Palacio de justicia vs. Colombia, contribuyen a que el Estado se vea obligado a desplegar acciones concretas directamente encaminadas a reparar más allá de la entrega de recursos económicos. Esto, a su vez, facilita el seguimiento de parte de la Corte.

La última palabra en cuanto a la forma de ser reparadas deben tenerla las mujeres víctimas, de la mano de los operadores de justicia. Hay formas de reparación que el derecho no ha regulado de manera específica, como “la verdad”. Es importante que la Corte diga expresamente que la búsqueda de la verdad es una manera de resarcir a las víctimas, y establezca fórmulas dentro de sus sentencias en donde obligue a los Estados a buscarla de forma comprometida y eficaz, más allá de hacer sugerencias en abstracto.

Las reparaciones deben estar encaminadas a recuperar la dignidad de las mujeres víctimas, y la interpretación que cada una tiene frente a este concepto varía. Por ello, se hace necesario que las reparaciones adquieran un carácter personalizado, y le permitan a las mujeres construir de la mano de la Corte o demás operadores de justicia el camino hacia la reconstrucción de un proyecto de vida en condiciones dignas.

El enfoque de género no implica simplemente reconocer que las víctimas son mujeres y pudieron ser afectadas distinto, reparándolas con un poco más de dinero. Cada mujer es distinta y vive las afectaciones a derechos humanos de una manera diferente. Reparaciones rígidas que responden a reglas taxativas se quedan cortas en relación con el objetivo real que estas tienen: restituir la dignidad.

Es imperativo conciliar la teoría de las reparaciones con las necesidades de quienes han sido víctimas de afectaciones a sus derechos humanos. En muchas ocasiones, las reparaciones ordenadas se centran más en la capacidad de los Estados para reparar, o en estándares prefijados, que en la necesidad real de cada víctima.

En este preciso momento, la Corte IDH discute el caso Yarce y otras vs. Colombia, en relación con las violaciones a derechos humanos de las mujeres cometidas en el marco de la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín. Esta es una oportunidad de oro para la Corte, y le permite probar reparaciones con enfoque de género y diferencial.

Esto es imprescindible para que las mujeres puedan empezar a sentirse identificadas con la justicia y puedan por fin acceder a ella con confianza y sintiéndose protagonistas.

Bibliografía

- Afonso C. y Beristain, C. (2013). *Memoria para la vida. Una Comisión de la Verdad desde las mujeres para Colombia*. Ruta Pacífica de las Mujeres, Universidad del País Vasco.
- Beristain, C. (2006). *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Casa de la Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres (2010). *Cuerpos y militarización, el despojo de nuestro primer territorio*. X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Mesa Mujer y Conflicto armado.
- Cepal, (2007). *Ni una más. El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe*.
- Comisión Para América Latina y el Caribe (2014). Informe anual 2013-2014. El Enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (LC/G 2626). Santiago de Chile: Cepal.
- Corporación Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las mujeres, con los aportes de Vamos Mujer y Mujeres que Crean (2008). *VIII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia*. Bogotá: Mesa de trabajo Mujer y Conflicto armado.
- Facio Alda, Camacho Rosalía et al. (1993). *Sobre patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones. Una mirada de genero sensitiva al derecho*. San José: ILANUD. Proyecto Mujer y Justicia de Penal.
- Foucault, M. (2012). *Vigilar, castigar, nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Fraser, N. (1997). *Iustitia Interrupta*. Facultad de Derecho. Universidad de los Andes. Bogotá: Siglo de Hombres editores.
- Fries, L. y Matus, V. (1999). *El derecho. Trauma y conjura patriarcal*. Santiago de Chile: Ediciones la Morada.

- Fries, L. y Matus, V. (2000). *La ley hace el delito*. Santiago de Chile: Ediciones la Morada.
- García-Moreno et al. (2005). *WHO Multi-country Study on Women's Health and domestic violence against women. Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses*. Ginebra: OMS.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses (2009). Colombia, Forensis.
- Intermon Oxfam (2009). *Violencia sexual en Colombia, un arma de guerra*. Campaña violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra. Bogotá.
- Krug et al. (2002). World Report on Violence and Health. Ginebra: OMS.
- Librería de Mujeres de Milán (1991). *No creas tener derechos. La generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres*.
- Marin Ortiz, I. y Collerd, S. (2011). Estado del Arte Documento Conceptual para elaboración de línea de Base. Documento sin publicar.
- Martin Beristain, C. (2012) Acompañar los proceso con las victimas. Fondo de Justicia transicional. Programa de promoción de la Convivencia, PNUD.
- Red de Mesa Ciudad Juárez, Cladem (2010). Campo Algodonero. Primera edición.
- Referenciada en Género con clase. *Informe anual sobre situación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, 2008-2009*.
- Rubio Marin, R. (2010). ¿Y que fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de derechos humanos. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia transicional.
- Sánchez Gómez, O. (2003). *Las rutas del feminismo. El pacifismo y las resistencias*. Ruta Pacífica de las Mujeres.
- Sánchez Gómez, O. (2008). *Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra*. Ruta Pacífica de las Mujeres. Bogotá.
- Sánchez, Gómez, O (2010). *¿Será que a las mujeres nos matan porque nos aman? Femicidios en Colombia, 2002-2009*. Bogotá: G 2 Impresores.

Secretaría General Organización de los Estados Americanos. Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Washigton 2006-2007.

Torres, I. (2001). *Aplicación de la cuota mínima de participación de las mujeres. ¿Ficción o realidad? Un diagnóstico para Costa Rica*. Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

Vallejo, C. (2005). *Representación de la violencia contra las mujeres en la prensa española, desde una perspectiva crítica de género*. Tesis doctoral, Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.

Varias autoras (2013). *La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado*. Ruta Pacífica de las Mujeres. Tomos I y II, versión resumida.

Young, Iris M. (2000). *La justicia y la política de la diferencia*. Edición Cátedra Universitat de Valencia. Madrid: Cátedra, Colección Feminismos.

Jurisprudencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Amparo vs. Venezuela*. Sentencia de 18 de enero de 1995.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Atala Rizzo vs. Chile*. Sentencia de 24 de febrero de 2012.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Centro de Reeducción del Menor vs. Paraguay*. Sentencia de 2 de Septiembre de 2004.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Diario Militar vs. Guatemala*. 20 de noviembre de 2012.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de Maria da Penha Maia Fernandez vs. Brasil*. 16 de abril de 2001.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gelman vs. Uruguay*. 24 de febrero de 2011.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso la Rochela vs Colombia*. 11 de mayo de 2007.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Ituango vs. Colombia*. 1º de julio de 2006.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Lori Berenson vs Perú*. 25 de noviembre de 2004.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Mapiripán vs. Colombia*. 15 de septiembre de 2005.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Masacre del río Cacarica vs. Colombia* (Operación Génesis). 20 de noviembre de 2013.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Masacre dos Erres vs. Guatemala*. 20 de noviembre de 2009.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Neira Alegría y otros vs. Perú*. 19 de enero de 1995.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Niños de la Calle vs. Guatemala*. 19 de noviembre de 1999.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Penal Castro Castro vs. Perú*. 2008.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Rosendo Cantú vs. México*. 31 de agosto de 2010.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Santo Domingo vs. Colombia*. 30 de noviembre de 2012.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso 19 comerciantes vs. Colombia*. 5 de julio de 2004.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Caso X e hijos vs. Colombia*. MC 270 de 2009.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Sentencia Rodríguez Vera y otros (Desparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia*. 14 de noviembre de 2014.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010)*. 26 de mayo 2010.

Leyes y decretos

Congreso de la República. Ley 1448 de 2011. *Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones* (10 de junio de 2011).

Congreso de la República. Ley de 975 de 2005. *Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios* (25 de julio de 2005).

Corte Constitucional de Colombia. Auto 092 de 2008. *Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional* (14 de abril de 2008).

Convenciones Internacionales

Comisión de la Verdad de las Mujeres (2013) (Ejercicio de la Ruta Pacífica para las Mujeres).

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (22 de noviembre de 1969).

Convención Belém do Pará (2004).

Convención de Pachuca (2014)

Convención de Viena (1993).

Convención para la erradicación de todas las formas de discriminación (1979).

Páginas web

<<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>>

<<http://www.endvawnow.org/es/articles/299-datos-basicos-.html>>

<<http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.8DzIv4pZ.dpuf>>

<<http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-eliminar-desigualdades-que-inciden-en-la-violencia-contra-las-mujeres>>

<www.inmujer.es/ss/satelite>

<<http://www.es.amnistry.org/temas/mujeres/violenciacontralas-mujeres/magnitud-cifras-datos/>>

<http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=100>

<<http://www.amnistry.usa.org/derechos-humanos-de-la-mujer>>

<<http://www.notice.org>>

<<http://www.generoconclase.blogs.com>>

<<http://archivo.cepal.org/pdfs/2007/S2007615.pdf>>

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf>

<<http://www.awf.or.jp/pdf/h0001.pdf>>

<<http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf>>

<<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>>

<<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>>

<<http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen3.html#dimensiones>>

<<http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen1.html><http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>>

<<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm>>

<<http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral19.htm>>

<http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm>

<[https://www.oas.org/es/cim/docs/BdP-Report2003\[SP\].pdf](https://www.oas.org/es/cim/docs/BdP-Report2003[SP].pdf)>

<<http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html>>

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf>

<www.generoconclase.blogspot.com>

<<https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>>